

Carta de Derechos Digitales
Trámite de audiencia e información pública

Observaciones realizadas por (denominación del participante en la consulta pública): **Miembros de los proyectos de investigación AICO/2019/205 y RTI2018-095367-B-I00**

Nombre y apellidos de los miembros de los referidos proyectos que han participado en la elaboración de las observaciones que presentamos:

Beatriz Tomás Mallén (IP proyecto AICO/2019/205)
Rosario García Mahamut (IP proyecto RTI2018-095367-B-I00)
Cristina Pauner Chulvi (IP proyecto RTI2018-095367-B-I00)
Mónica Arenas Ramiro
Guillermo García González
Gloria González Fuster
Lerdys Saray Heredia Sánchez
Luis Jimena Quesada
Mónica Martínez López-Sáez
Alfonso Ortega Giménez
Carmen Salcedo Beltrán
Jorge Viguri Cordero
Mònica Vilasau Solana

ÍNDICE

1. Introducción	3
1.1. Breve presentación sobre la relevancia de la Carta sometida a consulta pública	4
1.2. Consideraciones críticas sobre el texto de la Carta y enfoque de las observaciones y propuestas formuladas	7
2. Observaciones sobre el texto de la Carta de Derechos Digitales	12

1. Introducción

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, presentó el pasado 17 de noviembre a consulta pública la Carta de Derechos Digitales abriendo un plazo que inicialmente concluía el 4 de diciembre y que posteriormente se amplió hasta el 20 de diciembre.

Guiados por el compromiso universitario e investigador de transferencia del conocimiento hacia la sociedad, un grupo de profesores de diversas disciplinas (Derecho Constitucional, Derecho Laboral, Derecho Internacional Privado, Derecho Civil, etc.) hemos elaborado en el marco de sendos proyectos de investigación sobre la implementación del RGPD en España y, más concretamente, sobre el impacto de las cláusulas abiertas en la nueva LOPDGDD, en su normativa de desarrollo y en la legislación sectorial, las observaciones u alegaciones sobre la Carta de Derechos Digitales que ahora se presentan aprovechando la oportunidad que nos brinda el trámite de audiencia e información pública presentado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Concretamente, los referidos proyectos de investigación, que consolidan y profundizan en una línea de investigación iniciada hace más de una década sobre, en general, la protección de datos, y, en particular, la reforma del marco europeo en materia de protección de datos y su impacto nacional y comparado y la implementación del RGPD en España son:

- 1) El proyecto con referencia AICO/2019/205, financiado por la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana (en el marco de la convocatoria de subvenciones para grupos de investigación consolidables AICO-2019 de la Dirección General de Ciencia e Investigación), con fecha de inicio 01-01-2019 y fecha de finalización 31-03-2021 y cuya IP es Beatriz Tomás Mallén;
- 2) El proyecto con referencia RTI2018-095367-B-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (en el marco de la convocatoria de proyectos de I+D+i generación del conocimiento y retos investigación 2018) con fecha de inicio 01-01-2019 y fecha de finalización 31-12-2021, cuyas IP son Rosario García Mahamut y Cristina Pauner Chulvi.

Además de las mencionadas IP, los investigadores participantes en uno y/u otro proyecto y que han podido colaborar en la elaboración de estas observaciones son (citados por orden alfabético): Mónica Arenas Ramiro, Guillermo García González, Gloria González Fuster, Lerdys Saray Heredia Sánchez, Luis Jimena Quesada, Mónica Martínez López-Sáez, Alfonso Ortega Giménez, Carmen Salcedo Beltrán, Jorge Viguri Cordero y Mònica Vilasau Solana.

Por lo que se refiere, en concreto, al contenido del documento, se divide en dos partes diferenciadas:

- la primera, una Introducción integrada por una breve presentación sobre la relevancia del texto de la Carta sometida a consulta y por unas consideraciones críticas sobre dicho texto, así por el enfoque de las observaciones y propuestas que se formulan;
- la segunda, conformada por una tabla en la que se insertan, junto al texto de la Carta, comentarios en tres niveles:
 - comentarios sobre el texto de la Carta,
 - en su caso, equivalencia con el texto de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD),
 - y, por último, propuestas concretas (de adición, supresión o modificación) que puedan servir para orientar la labor tanto del Gobierno como del Legislador.

2. Breve presentación sobre la relevancia de la Carta sometida a consulta pública

La transformación digital está ocasionando nuevos desafíos para los derechos de las personas. La nueva Carta de Derechos Digitales pretende adaptar los derechos fundamentales a las nuevas dimensiones generadas por la innovación tecnológica, así como garantizar su protección. Tomando en consideración esta situación el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital constituyó el 15 de junio de 2020 un Grupo de

Expertos con el objetivo de proponer una Carta de Derechos Digitales. El objetivo primario del documento es brindar a la sociedad una Carta de Derechos Digitales necesarios en el mundo de la transformación digital, que verá la luz a finales de 2020. Su borrador se ha sometido a consulta pública hasta el 4 de diciembre de 2020.

La Carta pretende anclar los derechos digitales en una concepción actualizada y funcional a nuestro tiempo. El marco de los derechos digitales no puede ser exclusivamente un espacio de limitación al Estado. Debe también considerar la acción de los sujetos privados y disciplinar los derechos, deberes y obligaciones de la industria. Y debe hacerlo de un modo armónico y que contribuya a un desarrollo sostenible que oriente a los sectores público y privado hacia una transformación digital. Se trata de un documento que, como se explica en su introducción, “no trata descubrir nuevos derechos digitales pretendiendo que sean algo distinto de los derechos fundamentales ya reconocidos o de que las nuevas tecnologías y el ecosistema digital se erijan por definición en fuente de nuevos derechos”; sino “de concretar los [derechos] más relevantes en el entorno y los espacios digitales o describir derechos instrumentales o auxiliares de los primeros”.

Con más precisión, se señala que “el desarrollo y progresiva generalización de estas tecnologías y de los espacios digitales de comunicación e interrelación que ellas abren dan lugar a nuevos escenarios, contextos y conflictos que deben resolverse mediante la adaptación de los derechos y la interpretación sistemática del Ordenamiento en aras de la protección de los valores y bienes constitucionales y de la seguridad jurídica de los ciudadanos, operadores económicos y Administraciones públicas en sus respectivos ámbitos competenciales”.

Además, sus autores son conscientes de que “una Carta Nacional de Derechos Digitales debe proyectarse necesaria y adicionalmente hacía las Instituciones de la Unión de modo propositivo para alcanzar una normatividad efectiva que no prescinda de un acervo jurídico europeo”.

La Carta de Derechos Digitales contribuirá a reducir las brechas digitales que se han ampliado, en los últimos años, por motivos socioeconómicos, de género, generacionales o territoriales. En concreto, la implementación del derecho de acceso a Internet de calidad y asequible en todo el territorio

nacional, así como a la formación, capacitación y desarrollo de habilidades digitales en todos los sectores de la población, especialmente entre los colectivos más vulnerables, serán claves para luchar contra las brechas digitales y permitir la articulación territorial del país.

El proceso de elaboración de una Carta de Derechos Digitales tiene como objetivo reconocer los retos que plantea la adaptación de los derechos actuales al entorno virtual, y proponer un marco de referencia para contribuir a su protección en ese contexto. Para tal fin, la Secretaría de Estado de Digitalización e IA, perteneciente al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, puso en marcha un proceso amplio de consulta pública y ha impulsado los trabajos de un grupo de expertos en la materia formado por destacados juristas, representantes de usuarios e internautas o consultores de ciberseguridad, entre otros perfiles, con la participación de los ministerios de Justicia y Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y la Agencia Española de Protección de Datos.

Fruto de este trabajo, el texto elevado a consulta pública recoge un conjunto de principios y derechos para guiar futuros proyectos normativos y el desarrollo de las políticas públicas de forma que se garantice la protección de los derechos individuales y colectivos en los nuevos escenarios digitales. El borrador se somete a consulta pública coincidiendo con la celebración de un evento en el que han participado algunos de los miembros del grupo de expertos y otras personas activas en el debate público sobre los derechos digitales.

La elaboración de este documento contribuye a los objetivos ya avanzados en el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, con la que España pasó a ser el primer país europeo que garantizó una serie de derechos digitales relacionados con internet. Estos documentos ya proclamaban derechos tan importantes como el de la desconexión laboral o los relacionados con la protección de datos, la protección de los menores o con los medios de comunicación y las redes sociales. Es el caso de los relacionados con la protección de colectivos vulnerables, las nuevas relaciones laborales o el impacto de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.

Una vez recibas y analizadas las observaciones y aportaciones que se hagan en esta fase de consulta pública, se elaborará el texto final de la Carta de Derechos Digitales, que inspirará los futuros pasos a seguir por el gobierno y el parlamento en la protección de la sociedad de cara a los nuevos retos digitales, fijando los cimientos estructurales sobre los que asentar la salvaguarda de los derechos fundamentales en el escenario digital.

Con esta propuesta de Carta, España quiere seguir en una posición de vanguardia internacional en la protección de los derechos de la ciudadanía y contribuir activamente a las diferentes iniciativas y debates que se están desarrollando en el ámbito europeo y global.

3. Consideraciones críticas sobre el texto de la Carta y enfoque de las observaciones y propuestas formuladas

Se trata de un documento que, como se explica en su introducción, “no trata descubrir nuevos derechos digitales pretendiendo que sean algo distinto de los derechos fundamentales ya reconocidos o de que las nuevas tecnologías y el ecosistema digital se erijan por definición en fuente de nuevos derechos”; sino “de concretar los [derechos] más relevantes en el entorno y los espacios digitales o describir derechos instrumentales o auxiliares de los primeros”.

Con más precisión, se señala que “el desarrollo y progresiva generalización de estas tecnologías y de los espacios digitales de comunicación e interrelación que ellas abren dan lugar a nuevos escenarios, contextos y conflictos que deben resolverse mediante la adaptación de los derechos y la interpretación sistemática del Ordenamiento en aras de la protección de los valores y bienes constitucionales y de la seguridad jurídica de los ciudadanos, operadores económicos y Administraciones públicas en sus respectivos ámbitos competenciales”.

Además, los autores se declaran conscientes de que “una Carta Nacional de Derechos Digitales debe proyectarse necesaria y adicionalmente hacia las Instituciones de la Unión de modo propositivo para alcanzar una normatividad efectiva que no prescinda de un acervo jurídico europeo”.

Acerca de la naturaleza jurídica del texto de la Carta (que obviamente no es una ley ni mucho menos una constitución digital), se someten algunas observaciones y propuestas concretas a continuación. En todo caso, como se avanza en las consideraciones generales del Grupo de Expertos, se trata de un texto descriptivo, prescriptivo y prospectivo en el que se pretenden recoger los derechos más importantes en el entorno digital. La mayoría de ellos no son nuevos derechos, sino la adaptación al entorno digital de los derechos que ya están reconocidos en la Constitución, con la previsión de las medidas necesarias para garantizar su libre ejercicio en el nuevo entorno. Sin embargo, hay algunos derechos que sí se pueden considerar nuevos, porque no están recogidos en la Constitución (el derecho a la identidad digital o el derecho al pseudonimato), y también se recogen nuevos mecanismos para garantizar derechos existentes.

A este respecto, en lo que concierne a los principios que inspiran la Carta, esta se basa en un conjunto de valores que han inspirado los derechos que la conforman y que los autores entienden que deberán informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, si bien sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que en su caso los desarrollen. Entre estos principios destacan el de centralidad del ser humano, la preponderancia de los derechos fundamentales de la persona y de la universalidad de estos derechos.

Y, en fin, en lo que atañe a los mecanismos de tutela y garantía, según fuentes consultadas, la diversidad de posturas planteadas al respecto se han resumido en una propuesta que, partiendo del régimen vigente de garantía de los derechos, plantea diversas opciones, no excluyentes entre sí, como el establecimiento de mecanismos de autorregulación, un sistema de garantías extrajudiciales (o para jurisdiccionales de la Administración) y medidas de defensa jurisdiccional que pueden suponer, en un planteamiento inicial, la introducción de reformas procesales específicas y, con un planteamiento más ambicioso (y no compartido por todos los miembros del grupo), la creación de una jurisdicción específica sobre asuntos digitales.

En estas coordenadas, desde los proyectos de investigación en cuyo marco formulamos el presente documentos de alegaciones, observaciones y propuestas concretas, hemos partido de la circunstancia de que la comunidad científica y varios expertos legisladores han puesto sobre la mesa sus

impresiones sobre esta Carta de Derechos Digitales y coinciden en que puede ser un buen mimbres, pero quedan muchos detalles por explicar y especificar. En este sentido, se afirma que uno de los puntos más ambiciosos es el que hace mención a los neuroderechos. Es una tecnología que, como hemos visto, avanza a gran velocidad, y conviene “abrir el melón” y poner las cosas sobre la mesa cuanto antes.

Desde esta óptica, se ha de tener presente que el ámbito de los derechos digitales es un mundo muy cambiante y flexible, que depende totalmente de los progresos tecnológicos, con lo que estas normas que acaben aprobándose han de ser también muy flexibles y con capacidad de ser revisadas.

Una de las críticas más contundentes –en las que coinciden los expertos– tiene que ver con que algunas de las propuestas de la Carta podrían resultar incompatibles entre sí y, por ende, merecerían una revisión a nivel jurídico y técnico, una revisión que precisamente se inscriben las observaciones, alegaciones y propuestas que formulamos desde nuestros proyectos de investigación.

Por poner un ejemplo: el derecho a la identidad y a que no hagan un perfilado de los usuarios son técnicamente incompatibles con el derecho a que utilicen un seudónimo si no quieren dar su nombre y apellidos. Por ello, es necesario otra revisión de la Carta para entender un poco mejor cuál es el objetivo de este documento y perfilar su contenido de acuerdo con las sugerencias que se vayan realizando.

A diferencia de los derechos humanos analógicos, mucho más estables con el paso del tiempo, los relacionados con la vida de los ciudadanos en el entorno digital cambian con cada nuevo gran avance de la tecnología, por lo que es necesario entonces “asumir” que es un proceso dinámico y variable y en consonancia con ello, reformular los planteamientos con la misma dinámica.

Por otro lado, muchos de los derechos digitales que se plantean en el borrador de la Carta ya los reconocen las leyes actuales. Por ejemplo, se cita el derecho a la desconexión digital o el derecho a la no discriminación algorítmica en relación con las decisiones y procesos basados en algoritmos, pero el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ya asegura el derecho “a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el

tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar”. Y nos permite oponernos a ello.

Una de las críticas que han hecho otros especialistas en el ámbito legal es que no se incluya el derecho a conocer los medios por los que se ha tomado una decisión. Es decir, que las empresas que tomen decisiones sobre sus usuarios o trabajadores usando algoritmos (y sin supervisión humana), muestren cómo funciona ese sistema automatizado que ha intervenido en el proceso.

Si bien el borrador habla de asegurar la “transparencia”, “auditabilidad” y “explicabilidad” en el uso de algoritmos, no aclara cómo se aplicaría esto al ámbito privado si no es modificando leyes actuales. La Carta sí que cuenta con un apartado íntegro sobre las administraciones públicas en el que se citan también la transparencia y el diseño de los algoritmos. Es decir, que si las instituciones usan solo programas informáticos para tomar estas decisiones, deben ser explicados y auditados.

Lo mismo pasa con el derecho “a no ser localizado o perfilado”: esto solo podría darse con el consentimiento del interesado según la Carta, pero no se concreta cómo se ejercería si no es por la vía legislativa (aunque ya tengamos derecho a pedir que no nos perfilen).

La transformación digital permite, de una parte, fortalecer los derechos de los ciudadanos. El acceso al conocimiento, el derecho a la educación, el teletrabajo, la telemedicina, las relaciones con las administraciones públicas o el comercio electrónico se potencian y agilizan gracias a este proceso. A su vez, la inteligencia artificial, la robótica y la computación cuántica abren nuevos escenarios, muchos de los cuales todavía no podemos incluso ni atisbar.

Pero, al mismo tiempo, las tecnologías digitales hacen posible un mayor control de la persona y con ello de su identidad y del libre desarrollo de su personalidad. Propician una vigilancia constante que menoscaba derechos fundamentales. Permiten asimismo el trato discriminatorio de las

personas basado en decisiones que se adoptan fruto de perfiles elaborados con técnicas de *big data* e inteligencia artificial. Y viabilizan incidir en el desarrollo de la persona hasta niveles cercanos a su alienación.

Por tanto, la transformación digital impacta de lleno en los derechos fundamentales de todas las personas. Y resulta muy urgente introducir los cambios normativos para garantizar en el entorno digital los mismos derechos que en el entorno físico, e incluso reconocer nuevos derechos que favorezcan el desarrollo igualitario y equilibrado de la sociedad, tales como el derecho de acceso a Internet o la ciberseguridad personal, por ejemplo.

La elaboración de la Carta sigue la línea de los objetivos ya proclamados en el Título X de la LOPDGDD, con la que España pasó a ser el primer país europeo que garantizó jurídicamente una serie de derechos digitales relacionados con Internet.

Con esta propuesta de Carta, España quiere seguir en una posición de vanguardia internacional en la protección de los derechos de la ciudadanía y contribuir activamente a las diferentes iniciativas y debates que se están desarrollando en el ámbito europeo y global.

No podemos olvidar que hoy más que nunca, en el vigente contexto de la pandemia del COVID-19, los derechos digitales no son un plato de lujo que se sirva todos los días.

Es, en suma, en este contexto, en el que justamente se insertan las observaciones, alegaciones y propuestas, realizadas en el marco desde nuestros proyectos de investigación, con la modesta pretensión de mejorar su técnica normativa, su contenido y alcance para que esta nueva Carta de Derechos Digitales haga a estos más visibles y optimice su protección efectiva.

Comentarios al Documento para Consulta Pública sobre la Carta de Derechos Digitales
Miembros del Proyecto AICO/2019/205 (Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la
Generalitat Valenciana) y del Proyecto RTI2018-095367-B-I00 (Ministerio de Ciencia e Innovación).

Texto de la Carta de Derechos Digitales	Observación (aspectos formales/aspectos materiales)	Coincidencia sistemática con la LOPDGDD	Texto alternativo, modificado o propuesta
[Posible EXPOSICIÓN DE MOTIVOS que devenga PRÉAMBULO, o en su caso posible PRESENTACIÓN o INTRODUCCIÓN, basándose en las “CONSIDERACIONES PREVIAS” que acompañan a la Carta]	<p><u>OBSERVACIÓN GENERAL:</u></p> <p>- Se texto de la Carta de Derechos D g ta es pers que, entre otros mot vos, dotar de mayor v s b dad a ta es derechos y fomentar a cu tura de a protecc ón de datos persona es (para reforzar su garantía), resu ta necesar o encabezar e texto art cu ado por una parte ntroductor a que exp que esos mot vos, basándose fundamenta mente en as “CONSIDERACIONES PREVIAS” que acompañan a a Carta (redactadas por e Grupo de Expertos) y que, como se decía, habrá de ncorporarse forma mente a a Carta, conso dándose junto con e texto art cu ado.</p> <p>- En este sent do, d cha ncorporac ón habrá de efectuarse:</p> <p>* a) b en como “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS” (que devendrá “PRÉAMBULO” en e texto de Carta f na mente adoptado) s se pr or za a natura eza de a Carta como texto normat vo (s n perj u c o de su adopc ón con carácter más o menos programát co a modo de “Cód go de buena conducta” o nstrumento de “soft- aw”), o a ternat vamente</p> <p>* b) b en como “INTRODUCCIÓN” o “PRESENTACIÓN” s a opc ón es decantarse por una mera “Guía de buenas práctic as”.</p> <p>En todo caso, sea cua sea a opc ón f na mente reten da, y s endo ev dente que desde a perspect va técn ca se ha</p>		<p><u>PROPUESTAS CONCRETAS PARA LA REDACCIÓN DE LA PARTE INTRODUCTORIA DE LA CARTA (“PRÉAMBULO” O “INTRODUCCIÓN/PRESENTACIÓN”):</u></p> <p>* Como prem sa, nos basaremos, óg camente, en e texto de as “Cons derac ones Prev as” e aboradas por e Grupo de Expertos, para ncorporar as s gu entes observac ones, mat zac ones y propuestas:</p> <p>- A prec sar os objet vos de a Carta, enfat zar os de dotar de mayor v s b dad a os derechos d g ta es y fomentar a cu tura de a protecc ón de datos de carácter persona es reforzando su garantía.</p> <p>- A concretar as m smo esos objet vos, ta como se adv erte gua mente en a observac ón re at va a artícu o XXV (<i>infra</i>), debe redactarse de un modo más ponderado o equ brado e juego de tr p e objet vo (descr pt vo, prospect vo y prescr pt vo) que se recoge en as “Cons derac ones Prev as”, en una dob e d recc ón: de un ado, para que os objet vos descr pt vo y prospect vo no produzca confus ón en os dest natar os (espec a mente, en a c udanía) n resten va or pedagóg co a a Carta; y, de otro ado, para que e objet vo “prescr pt vo” no genere en a c udanía a percepc ón de que a Carta es mero “pape mojado” a sostenerse en esas “Cons derac ones Prev as” que “a Carta no t ene carácter normat vo”. Sobre este ú t mo punto, es prefer be exponer de forma más acertada (como se</p>

	<p>redactado como texto normativo o articulado, habrá de perfilarse, tanto en esa parte introductoria (se convierta en “Preámbulo” o en “Introducción/Presentación”) como en el último artículo, el XXV (véanse las observaciones específicas, <i>infra</i>), el alcance práctico de la Carta desde la perspectiva de su cumplimiento y eficacia.</p> <p>Desde esta perspectiva, será útil aprovechar el texto de esas “Consideraciones Previas” de Grupo de Expertos, teniendo presentes estas observaciones y las propuestas concretas que figuran en la última columna, así como las observaciones y propuestas de carácter transversal que se conciben con relación al primero (Artículo I) y último (Artículo XXV) de los artículos de la Carta.</p>		<p>propone, de nuevo, en las observaciones relativas al Artículo XXV), si acaso, que la Carta contenga normas programáticas que recogen disposiciones, valores, principios o pautas de naturaleza más o menos jurídica, más o menos ética, cuyo cumplimiento efectivo estará en función de las normas vigentes antes (nacionales, europeas e internacionales) de las que sean eventualmente reflejo, incluyendo el juego de las sanciones y garantías para el caso de incumplimiento.</p> <p>- Por último, al explicar la estructura y contenido de la Carta, deberá tenerse en cuenta la propuesta de suprimir las rúbricas con las que se encabezan los diversos bloques o grupos de derechos, por las razones que se explican en el siguiente apartado de observaciones. En su lugar, esa explicación podrá sencillamente sintetizar que la Carta sirve de pórtico al artículo I que nace en la exigencia de la obligación transversal de garantizar la dignidad humana y los derechos fundamentales en el entorno digital; que la parte central de la Carta (artículos II a XXII) concreta los derechos digitales y sus garantías específicas inspeccionándose básicamente en el Título X de la LOPDGDD, y que sirve de pieza de cierre a la Carta su régimen de cumplimiento y sistema de garantías.</p> <p>Alternativamente, no uso, si se quiere hacer hincapié en la evolución digital y el impacto digital en los derechos, se propone seguir una clasificación tradicional, en la que se recojan los derechos y libertades correspondientes evidenciando su evolución en el plano o entorno digital y añadiendo a continuación de las tradicionales generaciones de derechos, una nueva generación de los “nuevos derechos”.</p>
DERECHOS DE LIBERTAD	<u>OBSERVACIÓN GENERAL CON RELACIÓN A LAS RÚBRICAS QUE ENCABEZAN LOS DIVERSOS GRUPOS DE ARTÍCULOS/DERECHOS.</u>		<i>SE PROPONE LA SUPRESIÓN DE LAS RÚBRICAS QUE SIRVEN PARA CLASIFICAR O AGRUPAR LOS DIVERSOS DERECHOS, por las razones expuestas en las Observaciones.</i>

	<p><u>EN CONCRETO, SE PROPONE LA SUPRESIÓN DE TODAS ESAS RÚBRICAS, POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:</u></p> <p>- Se desconoce el criterio de categorización o agrupación, puesto que si aparentemente se emula en un primer momento la sistemática de la CDFUE, la continuación se deja de adoptar dicho criterio (de hecho, no aparece la rúbrica de "Dignidad" antes de la "Libertad/es" y de la "Igualdad", ni tampoco se compete después con la de "Solidaridad", la "Ciudadanía" o la de "Justicia").</p> <p>- Aunque se pretendía emular la referida clasificación, lo cierto es que no resulta convincente, por varias razones:</p> <p>* por un lado, la propia CDFUE ya fue objeto de crítica en su pretendida novedosa clasificación (por la difícil ubicación de unos derechos en un grupo o bloque o en otro diferente, dada la naturaleza mixta de algunos de ellos y la impregnación de principio de indivisibilidad);</p> <p>* por otro lado, la agrupación en la presente Carta de Derechos Dignidad no resulta satisfactoria, pues o bien se introducen derechos en el marco de lo que serían principios garantistas o interpretativos (como sucede con el artículo I, que se agrupa con los "DERECHOS DE LIBERTAD") e incluso garantías propiamente dichas (como ocurre con el artículo XXV, que erra el bloque de derechos agrupados bajo la rúbrica "DERECHOS DIGITALES EN ENTORNOS ESPECÍFICOS"), o bien no se entiende la ubicación de algunos derechos en un bloque y no en otro (lo cual puede predicarse, por ejemplo, de las libertades de expresión e información de art. XIII, que se ubican en el bloque de derechos bajo la rúbrica "DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y DE CONFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO", cuando tampoco habría sido descartable su ubicación bajo el bloque de "DERECHOS DE LIBERTAD", a menos que en el bloque elegido se esté suscitando la categoría de las "libertades públicas" - lo cual añadiría, en realidad, un nuevo ingrediente para la discusión y la confusión-); o de mismo modo cuando entre los DERECHOS DE LIBERTAD se recogen derechos que no pueden clasificarse sino como tales como es, por ejemplo, el</p>		
--	---	--	--

	<p>derecho a la herencia digital o de la seguridad digital, que exigen una participación y actuación, especialmente este último, de los poderes públicos para garantizarlos y hacerlos efectivos.</p> <p>-En fin, y por los motivos reseñados, la PROPUESTA concreta consiste en la SUPRESIÓN DE DICHAS RÚBRICAS, pues la pretendida organización o supuesto valor pedagógico no se consiguen (como tampoco lo consiguió la CDFUE, ni previamente la propia Constitución Española de 1978, cuya casificación responde a otros motivos, como se sabe, derivados del proceso constituyente), o a menos no más que en la praxis (menos discutible en términos de necesidad e interrelación) de reconocimiento de derechos sin agrupaciones ni bloques de la Declaración Universal de Derechos Humanos u otros textos internacionales fundamentales en la materia (como los dos Pactos de 1966 de la ONU, o el Convenio Europeo de Derechos Humanos o la Carta Social Europea de Consejo de Europa).</p>		
--	--	--	--

Texto de la Carta de Derechos Digitales	Observación (aspectos formales/aspectos materiales)	Coincidencia sistemática con la LOPDGDD	Texto alternativo, modificado o propuesta
DERECHOS DE LIBERTAD			
<p>I. Derechos y libertades en el entorno digital</p> <p>1. Los derechos fundamentales y libertades reconocidos en nuestra Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España están garantizados en el entorno o espacio digital.</p>	<p><u>Se PROPONE, con relación al apartado 1, modificar su redacción para optimizar la combinación de las fuentes inspiradoras. es decir, del art. 10.2 CE y del art. 79 LOPDGDD. En este sentido, las modificaciones propuestas consisten en lo siguiente:</u></p> <p>- Suprimir el calificativo “fundamentales” asociado a “derechos”, no únicamente porque podría vincularse tanto a derechos como a libertades (poniéndolo detrás de “libertades”), sino porque resulta más coherente con el art. 79 LOPDGDD (que habla tout court de “derechos y libertades”) y, sobre todo, más consistente con el hecho de que la garantía de los derechos digitales se extiende a</p>	Artículo 79 LOPDGDD	<p><i>Propuesta de nueva redacción del apartado 1:</i></p> <p>1. Los derechos fundamentales y libertades reconocidos en nuestra Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, a Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España están serán garantizados en el entorno o espacio digital.</p>

<p>2. Todas las personas poseen dénticos derechos en el entorno digital y en el analógico, sin perjuicio de las limitaciones que de acuerdo con la Constitución y las leyes pudieran establecerse atendiendo a las peculiaridades de cada ámbito.</p>	<p>todos (de las diversas categorías, si se quiere, en congruencia con la propia LOPDGDD y el principio de indivisibilidad) los que aparecen en la presente Carta, incluidos los del entorno laboral, etc.</p> <p>-Suprimir asimismo la referencia a la “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, igualmente en coherencia con el propio art. 79 LOPDGDD, que sigue con buen criterio la mejor redacción del art. 10.2 y de la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales de 2014, sin singularizar ningún tratado tras la referencia a la Declaración Universal; ello en la medida en que la alusión a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE puede parecer “exagerada”, pues la singularidad en materia de protección de datos de carácter personal de su art. 8 se ve incluso superada por otros tratados más específicos, anteriores y posteriores, como el Convenio 108 del Consejo de Europa de 1981 y su enmienda a través del Convenio 108+ de 2018 (teniendo presente, por lo demás, que el RGPD, pese a su relevancia, no es un tratado, sino Derecho derivado o secundario de la UE)</p> <p>-El inciso “están garantizados” sería mejor sustituirlo por otro más conminativo como “serán garantizados” o “se garantizarán”, puesto que resulta extraño dar por hecho que los derechos “están garantizados”, en lugar de decir que están consagrados o reconocidos y, por tanto, deben garantizarse en su disfrute cotidiano.</p> <p>La afirmación de que los derechos son idénticos no parece adecuada ya que se mantiene que lo son para después afirmar que hay que tener en cuenta las peculiaridades de cada ámbito de cara a determinar limitaciones. Si son idénticos, no hay peculiaridades. Si hay peculiaridades, no son idénticos. Por ello,</p> <p><u>Se PROPONE, con relación al apartado 2, sustituir el adjetivo “idénticos” por “iguales”. JUSTIFICACIÓN:</u></p> <p>-El adjetivo “dénticos” se hace eco únicamente del principio de igualdad formal (trato idéntico en todo caso), mientras que “iguales” da entrada asimismo al</p>		<p>Propuesta de nueva redacción del apartado 2:</p> <p>2. Todas las personas poseen iguales dénticos derechos en el entorno digital y en el analógico, sin perjuicio de las limitaciones que de acuerdo con la Constitución y las leyes pudieran establecerse atendiendo a las peculiaridades de cada ámbito.</p>
---	--	--	---

<p>3. Las leyes concretarán, en cuanto sea necesario, las especificidades de los derechos en el entorno digital y regularán su desenvolvimiento y efectividad estableciendo garantías y promoviendo la igualdad en el ecosistema digital.</p>	<p><i>principio de igualdad material (cabe trato diferente, pero no discriminatorio, tratando de manera igual a los iguales y de modo diverso a quienes merezcan medidas compensatorias por su posición diversa). Ello viene ya de una consolidada jurisprudencia del TEDH discerniendo entre trato idéntico “sin distinción alguna” (igualdad formal) y trato igual “sin discriminación” (igualdad material) al interpretar las versiones francesa e inglesa respectivamente del art. 14 CEDH.</i></p> <p><u>Se PROPONE, con relación al apartado 3, modificar su redacción en el siguiente sentido</u></p> <p>-Sustituir el inciso “en cuanto sea necesario” por “<u>en su caso</u>”, al menos por dos motivos: de un lado, la intervención legislativa puede producirse no únicamente cuando sea necesario, sino asimismo pertinente o más idóneo, lo cual viene reflejado mejor con la expresión “en su caso” (es decir, ante la eventualidad de querer procederse a esa intervención legislativa para mejor adopción de la normativa a la realidad); y, de otro lado, el adjetivo “necesario” es susceptible de generar confusión, pues puede hacer pensar en una intervención del legislador como necesidad (y no como opción legislativa), así como en un enfoque restrictivo y limitador de derechos (acudiendo a los criterios de proporcionalidad, necesidad en una sociedad democrática, etc.).</p> <p>-Sustituir el inciso “regularán su desenvolvimiento y efectividad estableciendo garantías” por “<u>regularán su ejercicio garantizando su efectividad</u>”, por dos motivos: por una parte, las leyes no regulan el “desenvolvimiento” de los derechos, sino que regulan su “ejercicio” (y, si se trata de leyes orgánicas, según el TC, no regulan, sino que “desarrollan” el contenido esencial (en otras palabras, la noción de “desenvolvimiento” resulta ajena a nuestra terminología constitucional, que se reconduce a “regulación del ejercicio” y “desarrollo” en el sentido expuesto; y, por otra parte, las leyes no regulan la efectividad, sino que la aseguran o garantizan.</p>	<p><i>Propuesta de nueva redacción del apartado 3:</i></p> <p>3. Las leyes concretarán, en cuanto sea necesario <u>en su caso</u>, las especificidades de los derechos en el entorno digital y regularán <u>su ejercicio garantizando su efectividad</u> su desenvolvimiento y efectividad estableciendo garantías y promoviendo la igualdad en el ecosistema digital.</p>
---	---	--

<p>4. Los procesos de transformación digital, el desarrollo y el uso de la tecnología digital, así como cualquier proceso de investigación científica y tecnológica relacionado con ellos o que los utilice instrumentalmente, deberán tener presente la exigencia de garantizar la dignidad humana, los derechos fundamentales, el libre desarrollo de la personalidad y ordenarse al logro de bien común.</p> <p>5. El principio de cumplimiento normativo desde el diseño deberá aplicarse íntegramente a desarrollo científico y tecnológico, así como a sus resultados. Los desarrollos científicos y tecnológicos contemporáneos en la determinación de sus requerimientos unánimes sobre el cumplimiento de tal principio.</p>	<p><i>El párrafo quinto, sobre el principio de cumplimiento normativo desde el diseño, no parece cuadrar bien en este artículo – ni tampoco, en general y de mantenerse, en la sección “Derechos de libertad”. Por todo ello,</i></p> <p><u>Se PROPONE, con relación al apartado 5, tres alternativas:</u></p> <p><u>-La primera:</u> la posibilidad de prescindir (suprimir) el apartado, por su carácter técnico (la consignación en la Carta del principio de cumplimiento normativo, no mencionado como tal siquiera en la LOPDGDD, puede generar una sensación en la ciudadanía de complejidad y tecnicismo de cara al valor pedagógico de la propia Carta) y específico (conectado con el art. 25 RGDP, en el marco de las obligaciones del responsable del tratamiento y del encargado del tratamiento, en donde se reflejan otros principios además del citado del cumplimiento normativo).</p> <p><u>-La segunda:</u> en caso de mantenerse dicho apartado 5, por coherencia precisamente con el citado art. 25 RGPD, así como de las letras d) y e) del art. 73 LPDGDD, añadir <u>“y por defecto”</u> tras “desde el diseño”</p> <p><u>- La tercera:</u> atendiendo a que parece más bien un principio horizontal, podría mencionarse al final de la Carta.</p>	<p>Artículo 73, en relación con apartado 5, se mantene.</p>	<p><i>Propuesta de nueva redacción del apartado 5:</i></p> <p>5. El principio de cumplimiento normativo desde el diseño <u>y por defecto</u> deberá aplicarse íntegramente a desarrollo científico y tecnológico, así como a sus resultados. Los desarrollos científicos y tecnológicos contemporáneos en la determinación de sus requerimientos unánimes sobre el cumplimiento de tal principio.</p>
---	--	--	--

	<p><i>* Con carácter general, entendemos que este primer artículo debería ser un artículo con carácter general donde se recogieran los principios transversales que deben impregnar todos los derechos reconocidos en la Carta.</i></p> <p><i>Asimismo, dado que entendemos que el artículo siguiente relativo a la protección de datos no incluye nada nuevo, pero su esencia sí que debe ser transversal a toda la Carta, creemos conveniente incluir aquí un nuevo apartado con este reconocimiento, suprimiendo el siguiente artículo</i></p> <p><i>Por ello, entendiendo que dicho artículo tiene un carácter general, se debería hablar de las garantías o mecanismos de protección de los mismos.</i></p> <p><i>* Finalmente queremos señalar un aspecto que quizá debería revisarse. Nos referimos a la nota a pie que se incluye para explicar el concepto de entorno o espacio digital se habla del concepto de ciudadanía digital y se vincula a un estatuto de derechos y obligaciones de las personas con independencia de su estatuto jurídico de nacional. Dado que la Carta no tiene carácter vinculante hablar de derechos y “obligaciones” y relacionarlo con la nacionalidad, debería tener un anclaje normativo.</i></p>		<p><i>Propuesta de inclusión de nuevos apartados 6 y 7:</i></p> <p>6. Dado el incremento de tratamiento generalizado de datos personales en el entorno o espacio digital, se prestará especial atención a la garantía de derecho a la protección de datos, así como al correcto cumplimiento de sus principios y obligaciones.</p> <p>7. Los derechos y libertades reconocidos en la presente Carta gozan de los mismos mecanismos de protección que tienen fuera de entorno o espacio digital. Se podrán establecer o promover mecanismos adicionales de protección o autoridades u organismos independientes que garanticen su reconocimiento y cumplimiento.</p>
<p>II. Derecho a la protección de datos</p> <p>1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernen.</p> <p>2. Estos datos se tratarán de modo sea, para fines concretos y sobre la base de consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene</p>	<p><i>Este precepto es una cita textual del artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. El valor añadido de repetir sin más el texto de la Carta es limitado. Cabría preguntarse, de todas formas, si se copia y pega el artículo 8, por qué mencionar sólo este artículo: el artículo 7, por ejemplo, es también esencial. Es más, puede llegarse a recomendar la supresión de este artículo en tanto que no añade nuevo a la Carta ni es un derecho que sea de nuevo reconocimiento.</i></p>		

<p>derecho a acceder a los datos recogidos que le conciernan y a obtener su rectificación.</p> <p>3. El respeto de estas normas estará sujeto a control de una autoridad independiente.</p>	<p><i>Entendemos que este derecho ha cobrado mayor importancia con los avances tecnológicos y el proceso de digitalización que vivimos y, por ello, consideramos más conveniente meterlo como un principio de cumplimiento transversal o incluirlo en el anterior derecho, como se ha indicado.</i></p>		
<p>III. Derecho a la identidad en el entorno digital</p> <p>1. Se reconoce el derecho a la propia identidad en el entorno digital, de acuerdo con el ordenamiento jurídico nacional y europeo.</p> <p>2. La identidad no podrá ser alterada, controlada o manipulada por terceros contra la voluntad de la persona.</p> <p>3. Se establecerán las garantías que permitan preservar y controlar la propia identidad en el entorno digital.</p>	<p><i>El reconocimiento de este derecho nos plantea problemas de comprensión de su alcance y garantías.</i></p> <p><i>* Por lo que se refiere al concepto, no queda claro si esto se refiere al derecho a la identidad en sentido de “legal identity” (reconocimiento oficial de la identidad) o es un derecho a la personalidad y a su desarrollo.</i></p> <p><i>* Por lo que se refiere a las garantías, entendemos que hay dificultades para compatibilizar este derecho a la identidad en el entorno digital con el pseudonimato ya que la persona puede construir muchas identidades digitales que no se correspondan con ella.</i></p>		
<p>IV. Derecho al pseudonimato</p> <p>1. De acuerdo con las posibilidades técnicas disponibles los entornos digitales permitirán el acceso en condiciones de pseudonimidad.</p> <p>2. El diseño de la pseudonimidad a la que se refiere el párrafo anterior asegurará la posibilidad de reidentificar a las personas en los casos y con las garantías previstos por el ordenamiento jurídico.</p>	<p>Se propone que</p> <p><i>* se mencione asimismo el derecho al anonimato. Esta propuesta se vincula al carácter pedagógico que desea que tenga la Carta. Puede resultar distorsionador encontrar el reflejo del derecho a la pseudonimidad sin plasmar la categoría del anonimato, también reconocida por el RGPD o la propia LOPDGDD.</i></p> <p><i>* Este derecho debería vincularse con la exigencia de procesos, especialmente públicos o de concurrencia, en los que no será posible dicho pseudonimato así como con la protección de determinados tipos de bienes o sujetos.</i></p>		<p><i>Propuesta de nueva redacción del apartado 1:</i></p> <p>1. De acuerdo con las posibilidades técnicas disponibles los entornos digitales permitirán el acceso en condiciones de pseudonimidad, siempre que el ordenamiento jurídico o la necesidad de protección de los derechos y libertades de terceros interesados, especialmente cuando estén involucrados menores, no exijan la reidentificación de sujeto en el entorno o espacio digital correspondiente.</p>
<p>V. Derecho a no ser localizado y perfilado</p> <p>1. El derecho a la libre autodeterminación individual y a la garantía de las libertades comporta el</p>	<p>Se propone que</p> <p><i>* Respecto al apartado 1, no se regulen en el mismo precepto dos derechos que no guardan relación entre sí. En este sentido el derecho a no ser perfilado se vincula más directamente con el derecho a la pseudonimidad</i></p>		

<p>derecho a no ser objeto de localización, ni a ser sometido a análisis de la personalidad o conducta que impliquen el perfilado de la persona.</p> <p>2. Sólo serán posibles estas tratamientos de información personal con el consentimiento de la persona afectada o en los casos y con las garantías previstos en las leyes.</p>	<p>(artículo IV de la Carta), a la identidad digital (artículo III de la Carta) dándose incompatibilidad técnica entre ellos.</p> <p><i>* Respecto al apartado 2, se afirma que la geolocalización y el perfilado solo podrían darse con el consentimiento de la persona afectada pero no se concreta cómo se ejercería si no es por la vía legislativa ni que, previamente, ya tenemos derecho a reclamar que no nos perfilen.</i></p>		
<p>VI. Derecho a la seguridad digital</p> <p>1. Toda persona tiene derecho a la seguridad en el entorno digital.</p> <p>2. Los poderes públicos adoptarán y promoverán las medidas necesarias para garantizar aquélla, en colaboración siempre con las empresas tecnológicas y con los usuarios.</p>	<p><i>El apartado 1 resulta ambiguo porque el derecho a la seguridad tiene múltiples acepciones, habría que aclarar a qué se refiere este artículo: ¿seguridad de los datos? ¿de las infraestructuras? ¿de las comunicaciones? ¿seguridad e integridad de las personas?</i></p> <p><i>Por otra parte, se debería incluir o señalar el límite a esa seguridad digital con el fin de evitar abusos que limiten o lesionen otros derechos en aras de garantizar la seguridad digital.</i></p>	<p>Artículo 82 LOPDGDD</p>	<p>1. Se propone que se adicione el concepto de seguridad en el apartado 1.</p> <p>Se propone la adición de un nuevo apartado 3</p> <p>3. La garantía de la seguridad digital no podrá suponer, en ningún caso, la limitación de los derechos y libertades reconocidos constitucionalmente, de forma ilimitada o injustificada en una sociedad democrática.</p>
<p>VII. Derecho a la herencia digital</p>	<p><i>Llama la atención que la denominación del derecho a la herencia digital no es coherente con la denominación del derecho al testamento digital del art. 96 LOPDGDD. La explicación reside en que el concepto de herencia es más amplio que el de testamento, incluyendo en este caso también, bienes digitales).</i></p> <p><i>No obstante, debe matizarse:</i></p> <p><i>a) Aunque es cierto que ambos conceptos pueden diferir entre ellos, la doctrina alude a ambos términos de manera semejante por lo que se podría haber citado</i></p>	<p>Artículo 3 LOPDGDD Artículo 96 LOPDGDD Artículo 6 RGPD Artículo 27 RGPD</p>	

<p>1. Se reconoce el derecho a la herencia digital de todos los bienes y derechos de los que sea titular la persona fallecida en el entorno digital.</p> <p>2. El acceso a contenidos y servicios digitales de los que fuera titular la persona fallecida se hará conforme a las reglas generales de Código Civil, asimismo de las Comunidades autónomas con derecho civil, foral o especial, propio y el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.</p>	<p><i>expresamente en el apartado 2 el testamento digital de forma que se clarifica que son dos conceptos diferenciados. La regulación de cada apartado se refiere, a nuestro entender, a vertientes distintas: Mientras que el apartado 1 alude a patrimonio digital (vertiente patrimonial), el apartado 2 se refiere a la identidad digital de la persona fallecida (vertiente personal).</i></p> <p><i>b) Debería recogerse más claramente la perspectiva del fallecido, por ejemplo, aclarando que toda persona tiene derecho a decidir qué ocurrirá con los datos que la conciernen tras su muerte, pudiendo disponer libremente se borren aquellos sobre los que no recaiga una obligación de tratamiento, y su voluntad deberá ser respetada (modelo francés).</i></p>		<p><i>Se propone una modificación puramente formal, por prurito literario, del apartado 1, cuyo tenor será pasaría a ser: “Se reconoce el derecho a la herencia digital de todos los bienes y derechos de los que la persona fallecida en el entorno digital.”</i></p> <p><i>Propuesta de nueva redacción del apartado 2:</i></p> <p>2. El acceso a contenidos y servicios digitales de los que fuera titular la persona fallecida se hará conforme a las reglas generales de Código Civil, asimismo de las Comunidades autónomas con derecho civil, foral o especial, propio y el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.</p> <p><i>Propuesta de nuevo apartado 3:</i></p> <p>3. Se garantizará el derecho de toda persona a determinar el destino de sus datos personales tras su muerte en relación con los prestadores de servicios pudiendo disponer libremente sobre su eliminación cuando no recaiga una obligación de tratamiento. Serán nulas las cláusulas contractuales que limiten estos derechos de usuario.</p>
--	--	--	--

<p>DERECHOS DE IGUALDAD</p>	<p><i>Entendemos, como ha quedado dicho, que más que derechos de igualdad, el principio de igualdad debería reconocerse con carácter transversal. La igualdad y la perspectiva de género debe predicarse de todos los derechos.</i></p> <p><i>Asimismo, entendemos que en dicho bloque y de mantenerse, salvo el primer artículo (el VIII), el resto no habla de derechos sino de los sujetos. Sería más conveniente, por los motivos indicados, hablar de “Protección de sujetos vulnerables”.</i></p> <p><i>En cualquier caso, reiteramos que, en nuestra opinión, las rúbricas que sirven para clasificar o agrupar los diversos derechos deberían suprimirse por las razones expuestas en las Observaciones ubicadas junto a la rúbrica DERECHOS DE LIBERTAD.</i></p>		
<p>VIII. Derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital</p> <p>1. Se reconoce el derecho a la igualdad en los entornos digitales, a no discriminación y a no exclusión. En particular, se reconoce el derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres en entornos digitales. Los procesos de transformación digital apocarán a perspectiva de género.</p> <p>2. Los poderes públicos garantizarán políticas ordenadas a la garantía de acceso efectivo de todas las personas a los servicios y oportunidades que ofrecen los entornos digitales en cualquiera de sus dimensiones, garantizarán el derecho a la no exclusión digital y combatirán las brechas digitales en todas sus manifestaciones, atendiendo particularmente a la brecha territorial y asegurando un derecho de acceso</p>	<p><i>Este derecho debería pasar a ser un principio informador de toda la Carta y recogerse como tal en la Exposición/Introducción. En este caso, y puesto que irradia toda la Carta, no sería aconsejable destacar solo uno de los motivos de discriminación (ya está destacado en este artículo VIII) sino que debería mencionarse explícitamente que nadie podrá ser discriminado, en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.</i></p>	<p>Artículo 81 LOPDGDD</p>	

un versa , asequible, de calidad y no discriminatorio a Internet para toda la población.			
<p>IX. Protección de menores en el entorno digital</p> <p>1. Los progenitores, tutores, curadores o representantes legales procurarán que los menores de edad hagan un uso equibrado y responsable de los dispositivos, de los entornos digitales y de los servicios de la sociedad de la información a fin de garantizar el adecuado desarrollo de su personalidad y preservar su dignidad y sus derechos fundamentales.</p> <p>2. Los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en entornos digitales en las que participen menores de edad garantizarán la protección de interés superior de menor y sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la protección de datos personales, en la publicación o difusión de sus datos personales a través de servicios de la sociedad de la información.</p> <p>3. Salvo en las excepciones previstas en las leyes, se prohíben los tratamientos de la información de los menores orientados a establecer perfiles de personalidad en entornos digitales.</p> <p>4. Se consideran ilícitas las prácticas de perfilado susceptibles de manipular o perturbar la voluntad de los menores y, en particular, la publicidad basada en este tipo de técnicas.</p> <p>5. Se impondrá el estudio de impacto en el desarrollo de la personalidad de</p>	<p>En el apartado 2 se propone que, entre las medidas de protección de menores en el entorno digital, se ha de enfatizar la necesidad de garantizar sus derechos y libertades incluyendo que se especifiquen las modalidades de ejercicio de sus derechos en el entorno digital y explícitamente “el derecho a una información adecuada y adaptada a sus necesidades así como el derecho a que se les proporcionen los medios adecuados para protegerse y, en caso necesario, defenderse ante un determinado comportamiento o acción ilícita”.</p> <p><i>El apartado 5 es demasiado específico y no se refiere a un derecho en sí, no parece cuadrar en la Carta por lo que se propone que se elimine y se concrete en políticas</i></p>	<p>Artículo 84 LOPDGDD Artículo 92 LOPDGDD</p>	<p><i>Propuesta de nuevo apartado 2:</i></p> <p>2. Los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en entornos digitales en las que participen menores de edad garantizarán la protección de interés superior de menor y sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la protección de datos personales, en la publicación o difusión de sus datos personales a través de servicios de la sociedad de la información. Asimismo, se garantizará el derecho de menor a una información adecuada y adaptada a sus necesidades, así como el derecho a que se le proporcionen los medios adecuados para protegerse y, en caso necesario, defenderse ante un determinado comportamiento o acción ilícita.</p> <p><i>Propuesta de eliminación del apartado 5.</i></p>

<p>os menores derivado de acceso a entornos digitales, así como a contenidos nocivos o peligrosos. Debo estudiar prestará particular atención a sus efectos en la educación afectivo-sexual, las conductas dependientes, la igualdad de género, así como los comportamientos antidemocráticos, racistas y violentos.</p>	<p><i>públicas donde se podrá clarificar el sujeto impulsor del estudio de impacto que tampoco aparece determinado.</i></p> <p>Sí bien existe un derecho dedicado a la educación digital, se debería aprovechar el artículo dedicado a los menores para hacer hincapié en su formación en respeto por los derechos fundamentales en el entorno digital y en la enseñanza de la garantía y el respeto de los mismos para evitar temas como el <i>ciberbullying</i> o el <i>sexting</i> o la mera erosión de derecho a la imagen o protección de datos por las redes sociales. No podemos olvidar la específica vulnerabilidad de los menores en este terreno y la no percepción de los peligros.</p>		<p><i>Propuesta de nuevo apartado 6 (o 5 si se suprime el 5):</i></p> <p>6. Los poderes públicos promoverán y contribuirán a la realización efectiva de derecho a una educación digital en el caso de los menores, prestando específica atención a su formación frente a las prácticas de ciberdelincuencia en el entorno digital dirigidas a este colectivo o que tienen como víctimas a este colectivo. En este sentido, se promoverán campañas de prevención, sensibilización y reparación de daño causado en el entorno virtual entre los menores, prestando específica atención a las víctimas y a sus agresores. Los centros escolares incorporarán, en la medida de lo posible, dichas actividades formativas, en el proceso educativo.</p>
<p>X. Protección de personas con discapacidad en el entorno digital</p>	<p><i>La mención, por vez primera en toda la Carta, del concepto de accesibilidad nos permite introducir una reflexión previa sobre este concepto que recomendaría su reconocimiento de manera autónoma en la Carta.</i></p> <p><i>Así el concepto de accesibilidad universal beneficia a toda la sociedad ya que implica que cualquier entorno pueda ser utilizado por cualquier persona, sin tener en cuenta su discapacidad, edad, entorno social.</i></p> <p><i>Puede hacerse una mención específica a las personas con discapacidad, pero la accesibilidad por edad también juega (tamaño de fuentes) o el entorno social (acceso a redes de wifi con altas capacidades, por ejemplo).</i></p> <p><i>Estas consideraciones nos llevan a sugerir que el derecho a la accesibilidad no sea reconocido expresa y únicamente a determinados colectivos de manera que se valore la posibilidad de configurarlo como un derecho transversal cuya ubicación más apropiada sería como un nuevo apartado del artículo 1.</i></p>		

<p>1. Se garantizará a accesibilidad de los entornos digitales a las personas con discapacidad tanto desde el punto de vista tecnológico como respecto de sus contenidos. En particular, asegurarán que la información relativa a las condiciones egales de servicio resulte accesible y comprensible.</p> <p>2. Los entornos digitales, y en particular los que tengan por finalidad la participación política digital, asegurarán a participación efectiva de las personas con discapacidad o diversidad funcional.</p> <p>3. Se garantizará el derecho a la educación digital de las personas con discapacidad.</p>	<p>Se propone que</p> <p>a) se modifique el título del artículo y todas las menciones incluidas en los apartados en relación con la denominación de “personas con discapacidad” valorándose la utilización de la terminología “personas con diversidad funcional”</p> <p>b) se elimine la mención a las personas con “diversidad funcional” del apartado 2. Resulta redundante (una persona con discapacidad tiene alguna/s diversidades funcionales).</p> <p>La legislación vigente en materia de discapacidad utiliza este término y el debate sobre la oportunidad de sustituirlo por otros como “diversidad funcional” es antiguo y no pacífico. Por lo tanto, entendemos que se debe apostar por una u otra denominación y redactar con coherencia el título del artículo y los apartados del mismo.</p>		<p><i>Propuesta de nuevo título y adaptación del resto de apartados:</i></p> <p>X. Protección de las personas con diversidad funcional en el entorno digital</p> <p>1. Se garantizará a accesibilidad de los entornos digitales a las personas con diversidad funcional tanto desde el punto de vista tecnológico como respecto de sus contenidos. En particular, asegurarán que la información relativa a las condiciones egales de servicio resulte accesible y comprensible.</p> <p>2. Los entornos digitales, y en particular los que tengan por finalidad la participación política digital, asegurarán a participación efectiva de las personas con diversidad funcional.</p> <p>3. Se garantizará el derecho a la educación digital de las personas con diversidad funcional.</p>
<p>XI. Protección de las personas mayores en el entorno digital</p> <p>1. Se reconoce el derecho de las personas mayores a acceso a los entornos digitales.</p> <p>2. Se garantizará a accesibilidad a los entornos digitales a las personas de este colectivo.</p>	<p><i>* El derecho al acceso a los entornos digitales no se reconoce específicamente a las personas con discapacidad y sí se hace en relación con las personas mayores. No se entiende esta asimetría. Se propone su eliminación en relación con las personas mayores pues ya se reconoce para todas sin excepción en el art. I. La concreción resulta innecesaria. Por tanto, se propone eliminar.</i></p> <p><i>* Se propone que se incluya otro párrafo para garantizar la formación de los mayores para favorecer el conocimiento y uso de los entornos digitales y la participación segura en los mismos.</i></p>	Artículo 81 LOPDGDD	<p><i>Propuesta de eliminación del apartado 1.</i></p> <p>“1. Se reconoce el derecho de las personas mayores a acceso a los entornos digitales.”</p> <p><i>Propuesta de nuevo apartado 3 (se elimina el apartado 1, quedará como nuevo apartado 2).</i></p> <p>3. Se fomentará e impulsará la formación de las personas mayores en el entorno o espacio digital.</p>
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y DE CONFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO			

<p>XII. Derecho a la neutralidad de Internet</p> <p>Los poderes públicos garantizarán el derecho de os usuarios a la neutralidad de Internet. Los proveedores de servicios de Internet proporcionarán una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos, en los términos previstos en el Reglamento (UE) 2015/2120 de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una Internet abierta, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.</p>	<p><i>* Se propone que se diferencie entre el principio de neutralidad de Internet con el derecho de acceso universal al entorno digital (derecho al trato equitativo y no discriminatorio) porque, a pesar que el precepto remite a los términos previstos en el Reglamento (UE), la regulación no es coincidente. En la normativa europea, el principio de neutralidad de Internet abarca dos obligaciones: por un lado, la obligación de tratar todo el tráfico de manera equitativa, sin discriminación, restricción o interferencia, con independencia del emisor y el receptor, el contenido, las aplicaciones o servicios o el equipo terminal empleado y por otro, la obligación de no bloquear, ralentizar, alterar, restringir, interferir, degradar, ni discriminar entre contenidos, aplicaciones o servicios concretos o categorías específicas.</i></p> <p><i>Así pues, la neutralidad de la Internet se enmarca entre las obligaciones de los proveedores de servicios mientras que el derecho de acceso universal al entorno digital se contextualiza entre los derechos de los usuarios.</i></p> <p><i>En este sentido, nos parece adecuado el reconocimiento de ambos derechos que contiene la LOPDGDD. En este sentido, la selección de derechos que realiza la Carta puede alimentar las críticas por su falta de exhaustividad (como reflexión, el reconocimiento del derecho a la protección de datos, pero la no consagración del derecho a la privacidad en los entornos digitales es uno de estos llamativos ejemplos) y la vinculación entre el derecho de acceso universal al principio de neutralidad de Internet justifican, en nuestra opinión, su inclusión.</i></p>	<p>Artículo 80 LOPDGDD</p>	<p><i>Propuesta de nuevo artículo XIII (ex gría renumeración de los artículos siguientes).</i></p> <p>XIII. Derecho de acceso universal a Internet</p> <p>Los poderes públicos garantizarán el derecho de todas las personas al acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio a Internet independientemente su condición persona, social, económica o geográfica.</p>
<p>XIII. Libertad de Expresión y Libertad de Información</p> <p>1. Todos tienen derecho a las libertades de expresión e información en entornos digitales en los términos previstos por la Constitución. Se garantizarán los principios constitucionales relativos a la veracidad, el pluralismo informativo y a</p>	<p><i>* El precepto presenta aspectos positivos ya que</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• En primer lugar, introduce una novedosa diferenciación entre libertad de expresión y libertad de información, distinción que caracteriza al reconocimiento constitucional de estos derechos de manera individualizada en el artículo 20 y completa el reconocimiento del derecho de rectificación y de actualización de informaciones contenidos en los arts. 85 y 86 LOPDGDD, respectivamente.</i> 	<p>Artículo 85 LOPDGDD Artículo 86 LOPDGDD</p>	

<p>diversidad de opiniones e informaciones.</p> <p>2. Los responsables de medios de comunicación, así como los de los entornos digitales que o bien tengan por objeto el ejercicio de libertades de párrafo anterior por sus titulares o bien provean tal servicio a sus usuarios, adoptarán protocolos adecuados para garantizar los derechos de todas las personas a:</p> <p>a) Conocer cuándo la información sea elaborada sin intervención humana mediante procesos automatizados.</p> <p>b) A conocer cuándo una información ha sido clasificada o priorizada por el proveedor mediante técnicas de perfilado o equivalentes. Cuando esta información sea patrocinada por un tercero deberá informarse de modo específico sobre la naturaleza publicitaria de la misma.</p> <p>c) A solicitar de prestador la no aplicación de técnicas de análisis que permitan ofrecer información que afecte a las libertades de expresión, religión, de pensamiento o creencias.</p> <p>d) A posibilitar el ejercicio de derecho de rectificación ya sea frente a medios de</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>En segundo lugar, apuesta por la autorregulación regulada en coherencia con la línea de acción recomendada por la Comisión Europea.</i> <p>* En el apartado 2, debe matizarse que se trata de “Los responsables de medios de comunicación digitales...”</p> <p>* <i>En relación con el apartado b, el derecho a la transparencia comercial y a conocer el contenido patrocinado debe garantizarse en tiempo real al usuario. Formalmente, hay que eliminar la preposición “a” porque se repite.</i></p> <p>* <i>En relación con el apartado c) se considera que hay que asegurar la protección del usuario y que no sufrirá ninguna merma en sus derechos en caso de que opte por descartar las técnicas de perfilado en los servicios que utilice.</i></p> <p>* <i>En relación con el apartado d) habría que actualizar y adaptar el procedimiento de rectificación al entorno digital ya que la regulación contenida en LO 2/1984 no es</i></p>		<p><i>Propuesta de modificación del apartado 2</i></p> <p>2. Los responsables de medios de comunicación digitales, así como los de los entornos digitales que o bien tengan por objeto el ejercicio de libertades de párrafo anterior por sus titulares o bien provean tal servicio a sus usuarios, adoptarán protocolos adecuados para garantizar los derechos de todas las personas a:</p> <p><i>Propuesta de modificación del apartado 2.a</i></p> <p>a) Conocer cuándo la información ha sido elaborada sin intervención humana mediante procesos automatizados.</p> <p><i>Propuesta de modificación del apartado 2.b</i></p> <p>b) A Conocer en tiempo real cuándo una información ha sido clasificada o priorizada por el proveedor mediante técnicas de perfilado o equivalentes. Cuando esta información sea patrocinada por un tercero deberá informarse de modo específico sobre la naturaleza publicitaria de la misma.</p> <p><i>Propuesta de modificación del apartado 2.c</i></p> <p>c) A Solicitar de prestador la no aplicación de técnicas de análisis que permitan ofrecer información que afecte a las libertades de expresión, religión, de pensamiento o creencias sin que esto pueda suponer ningún perjuicio en sus derechos.</p> <p><i>Propuesta de modificación del apartado 2.d</i></p>
---	---	--	--

<p>comunicación, ya sea ante aquellos usuarios que fundamentan contenidos que atenten contra el derecho a honor, a intimidad personal y familiar en Internet y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz, atendiendo a los requisitos y procedimientos previstos en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación.</p> <p>Cuando los medios de comunicación digitales deban atender a solicitud de rectificación formulada contra ellos deberán proceder a la publicación en sus archivos digitales de un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia organizada refleja la situación actual de individuo. Dicho aviso deberá aparecer en lugar visible junto con la información organizada.</p> <p>e) A solicitar motivadamente de los medios de comunicación digitales la inclusión de un aviso de actuación suficientemente visible junto a las noticias que le concernan cuando la información contenida en la noticia organizada refleje su situación actual como consecuencia de circunstancias que hubieran tenido lugar después de la publicación, causando un perjuicio.</p> <p>En particular, procederá a inclusión de dicho aviso cuando las informaciones organizadas se refieran a actuaciones policiales o judiciales que se hayan visto afectadas en beneficio de interesado como consecuencia de decisiones judiciales posteriores. En este caso, el aviso hará referencia a la decisión posterior.</p>	<p><i>apropiada. Básicamente, los plazos establecidos en la mencionada norma están pensados para un mundo analógico y son excesivamente laxos para el entorno digital dada la facilidad para compartir y difundir contenidos. Se propone que se promueva la regulación en una Ley específica o la modificación de la LO 2/1984.</i></p>		<p>d) A Posibilitar el ejercicio de derecho de rectificación ya sea frente a medios de comunicación, ya sea ante aquellos usuarios que fundamentan contenidos que atenten contra el derecho a honor, a intimidad personal y familiar en Internet y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz, atendiendo a los requisitos y procedimientos previstos en la legislación vigente.</p> <p><i>Propuesta de modificación del apartado 2.d:</i></p> <p>e) A-Solicitar motivadamente....</p>
--	---	--	---

<p>Para ello, se promoverán entornos digitales que contribuyan a un derecho de acceso efectivo a la información pública, a la transparencia, a la rendición de cuentas, así como a la propuesta, el empoderamiento de las personas en las actuaciones de las Administraciones públicas en sus respectivos ámbitos competenciales, de acuerdo con la Constitución.</p> <p>2. Los procedimientos de participación ciudadana garantizarán condiciones de igualdad sin discriminaciones ni exclusión de personas, con sujeción al ordenamiento jurídico.</p>	<p>El acceso a la información, a la transparencia y a la rendición de cuentas son una obligación legal ya especificada en las leyes de transparencia por lo que hablar de promoción quizá no sea apropiado. Legalmente es un deber de los poderes públicos cuyo incumplimiento está sancionado. De hecho, parece redundante con el contenido de artículo XVI.3.</p> <p>En suma, el derecho de acceso a la información pública es una obligación recogida en la Ley de Transparencia – estatal y las respectivas autonómicas –, por lo que, en su caso, debería quedar reflejado de otra forma en el texto.</p> <p>Los derechos de participación –en general– ya están garantizados así que debería especificarse que se trata de entorno digital.</p> <p>Quizá sea conveniente hacer mención expresa a las personas vulnerables.</p>		<p><i>Propuesta de modificación del apartado 2:</i></p> <p>2. Los procedimientos de participación ciudadana digital garantizarán condiciones de igualdad sin discriminaciones ni exclusión de personas, con sujeción al ordenamiento jurídico.</p>
<p>XV. Derecho a la educación digital</p> <p>1. El sistema educativo garantizará la plena inserción de alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales.</p> <p>2. El profesorado recibirá la formación para adquirir las competencias digitales y la formación necesaria para la enseñanza y transmisión de los valores y derechos referidos en el apartado anterior.</p>		<p>Artículo 83 LOPDGDD</p>	

<p>3. En part cu ar os poderes púb cos con competenc a en a mater a promoverán:</p> <p>a) Los p anes de formac ón profes ona que se ordenarán a a nserc ón de as personas trabajadoras en os procesos de transformac ón d g ta .</p> <p>c) La formac ón de personas adu tas con part cu ar atenc ón a os mayores.</p> <p>d) La educac ón aud ov sua en e entorno d g ta , con a f na dad de promover a capac dad crít ca y afrontar as práct cas de des nformac ón.</p> <p>4. Se reconoce e derecho a a bertad de acceso a a educac ón y a a bertad de creac ón de centros que presten sus serv c os a través de entornos d g ta es, s n perju co de o d spuesto en as eyes respecto a cump mto de a normat va educat va y de a ob gac ón de a esco ar zac ón presenc a en os n ves de educac ón ob gator a.</p> <p>5. Se mpu sará a Educac ón para a Ciudadanía D g ta , porque una parte esenc a de a estrateg a de d g ta zac ón de a educac ón pasa por e desarro o de competenc as que perm tan que e uso de as tecnogías sea benef c oso para cada nd v duo y</p>	<p>Los dos pr meros subapartados de apartado 3 resu tan un tanto sorprendentes pues e resto de artícu o parece refer rse a derecho a a educac ón d g ta en e sistema educat vo genera .</p> <p>Por otro ado, en e caso de mantenerse os subapartados a y c (b en rea dad) de apartado 3, en este ú t mo podría añad rse a referenc a a as personas adu tas con d scapac dad.</p> <p>Ahora ben, a formac ón o educac ón d g ta de as personas con d scapac dad y de as personas mayores parece encontrar mejor ub cac ón en os artícu os X y XII y a dob e referenc a puede resu tar re terat va aunque en este art. XV se hab e de a formac ón de personas adu tas en genera y mayores en part cu ar.</p> <p>La expres ón “educac ón aud ov sua ” nos p antea dudas: s es para combat r a des nformac ón, se aconseja a expres ón “a fabet zac ón med át ca” pero s qu ere una expres ón más comprens va, se aconseja “educac ón d g ta ”.</p> <p>E apartado 4 puede p antear aguna duda de compat b dad con e artícu o 27 CE que reconoce e derecho a a educac ón, a a bertad de ense ñanza y a a creac ón de centros docentes. La Carta no debería d st ngur y espec fcar a a “creac ón de centros que presten sus serv c os a través de entornos d g ta es”. Ex ste una máx ma según a cua donde a Ley (en este caso a CE) no d st ngue, tampoco debe d st ngur se a ap car e Derecho..., por o tanto, no sería necesar a esta prev s ón de a Carta.</p>		<p>En e caso de mantenerse os subapartados a y c (b en rea dad) de apartado 3, se propone a mod f cac ón de apartado 3.c): “La formac ón de personas adu tas con part cu ar atenc ón a os mayores y personas con d vers dad func ona ” o qu zá, más correctamente, “La formac ón de adu tos con part cu ar atenc ón a as personas mayores y a as personas con d vers dad func ona ”.</p> <p><i>Propuestas de modificación del apartado 5:</i> Sust tu r a expres ón “pasa por” por otra equ va ente pues no parece una expres ón adecuada para un texto normat vo y además se rep te dos veces en e m smo apartado.</p>
---	--	--	---

<p>para el conjunto de la sociedad. Esta dimensión pasa por cuestiones como:</p> <p>a) Que los estudiantes aprendan a hacer un uso ético de las herramientas digitales en cuestiones como el uso de datos y el respecto a la privacidad ajena; o la identificación de información y comportamientos en la red que puede comprometer su salud o bienestar y a de terceros.</p> <p>b) Fortalecer el desarrollo de pensamiento crítico que les ayude a distinguir hechos objetivos de meras opiniones sin evidencias, que les permitan rechazar estereotipos discriminatorios, los discursos de odio o el ciberacoso.</p> <p>c) Fomentar también la capacidad de participar en la generación de información de manera activa, creativa y, sobre todo, responsable.</p> <p>d) Atender a diversidad de talentos y de procesos y ritmos de aprendizaje, particularmente aquellos que tienen necesidades específicas de apoyo educativo.</p>	<p>¿Cuáles es el colectivo a que se dirige este apartado b) y los siguientes? Se trata de estudiantes, el apartado final no concuerda (los alumnos no tienen que atender a diversidades, sí a materia).</p>		<p>a) Esto: “Que los estudiantes...” no sigue la pauta de resto de apartados que comienzan, correctamente, con un verbo en infinitivo.</p>
<p>XVI. Derechos digitales de la ciudadanía en sus relaciones con las Administraciones públicas</p> <p>1. Se reconoce el derecho de igualdad en el acceso a los servicios públicos y en las relaciones digitales con las Administraciones públicas. A través se promoverán políticas públicas activas que garanticen el acceso a los sistemas y los procedimientos.</p> <p>2. El poder público autor de una actividad en el entorno digital deberá</p>			

<p>dentificar a los órganos responsables de la misma.</p> <p>3. El principio de transparencia y de reutilización de datos de las Administraciones públicas garantizará la actuación de la Administración digital, de conformidad con la normativa sectorial. En particular, se garantizará el derecho de acceso a la información pública, se promoverá la publicidad activa y la rendición de cuentas y se velará por la portabilidad de los datos y la interoperabilidad de los formatos, sistemas y aplicaciones.</p> <p>4. Siempre que sea posible se promoverá la universalidad y la neutralidad de las tecnologías usadas por las Administraciones públicas, así como su diseño y uso conforme a los principios éticos que acompañan a esta Carta. Así mismo se adoptarán las medidas precisas para garantizar que la prestación de los proveedores de servicios que colaboren con ellos por medios digitales se realice conforme a las disposiciones de esta Carta.</p> <p>5. Se ofrecerán a ternativas en el mundo físico que garanticen los derechos de aquellas personas que opten por no utilizar recursos digitales.</p> <p>6. Los daños causados por actividades o decisiones digitales, podrán dar lugar a un derecho a la indemnización por toda lesión que las personas físicas o jurídicas sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, de acuerdo con las leyes.</p>	<p>El apartado 4 indica que “Siempre que sea posible” se garantizará neutralidad y universalidad por parte de las AAPP. No parece que sea correcto condicionar estos derechos de los usuarios cuando se trata de proveedores utilizados por las administraciones frente a la existencia de salvaguardas para los proveedores en general.</p> <p>Apartado 5. Puede entrar en contradicción con lo previsto en normativa estatal (Ley 39/2015), a menos en relación con los sujetos obligados a relacionarse siempre a través de medios electrónicos con la AP. Debería introducirse alguna aclaración en ese sentido.</p> <p>Apartado 6. Puede resultar muy difícil determinar si hay daño. Ejemplo: reclamar indemnización por daño moral (no patrimonial) por no haber obtenido un trabajo a expulso de un agotamiento psicológico humano.</p>		<p><i>Propuesta de modificación del apartado 4:</i> “Se promoverá la universalidad y la neutralidad de las tecnologías usadas por las Administraciones públicas...”</p>
---	---	--	--

<p>7. Los derechos de la ciudadanía en relación con la Intendencia Artística reconocidos en esta Carta resaltarán también de aplicación en el marco de la actuación administrativa, en particular en los aspectos referidos al diseño y al uso de algoritmos. En todo caso, se reconoce el derecho a:</p> <p>a) Que las decisiones y actividades en el entorno digital respeten los principios de buen gobierno y el derecho a una buena Administración digital.</p> <p>b) Un procedimiento de toma de decisiones con las debidas garantías.</p> <p>c) Obtener una motivación comprensible en lenguaje natural de las decisiones que se adopten en el entorno digital, con justificación de las normas jurídicas relevantes al caso y de los criterios de aplicación de las mismas.</p> <p>d) Que la adopción de decisiones discrecionales quede reservada a personas, salvo que una norma con rango de ley permita la adopción de decisiones automatizadas en este ámbito.</p> <p>Será necesaria una evaluación de impacto en los derechos digitales en el diseño de los algoritmos en el caso de adopción de decisiones automatizadas o semiautomatizadas. En todo caso, serán objeto de aprobación previa de los sistemas algorítmicos que se vayan a usar para la toma de decisiones, con determinación de su ámbito concreto de aplicación y estructura de funcionamiento.</p>	<p>Apartado 7.c): aconsejamos que esta previsión de “c) Obtener una <i>motivación comprensible en lenguaje natural de las decisiones que se adopten en el entorno digital</i>, con justificación de las normas jurídicas relevantes al caso y de los criterios de aplicación de las mismas”. debería establecerse con carácter general y no solo en el supuesto de IA por parte de las AAPP.</p> <p>Apartado 7.d) <i>in fine</i>: de igual manera, entendemos que la necesidad de realizar una evaluación de impacto en los derechos digitales en el caso de decisiones automatizadas o semiautomatizadas debería establecerse en general, y no solo predicarse en el caso de uso de algoritmos por parte de las AAPP.</p>		
---	---	--	--

DERECHOS DEL ENTORNO LABORAL Y EMPRESARIAL			
<p>XVII. Derechos en el ámbito laboral</p> <p>1. En el ámbito laboral los trabajadores y los empleados públicos tienen derecho a:</p> <p>a) La desconexión digital.</p> <p>b) La protección de su intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador, así como frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo.</p>	<p>SE PROPONE (en negrita y <u>subrayado</u>) añadir un inciso en la letra a) de apartado 1 que incluya en la importancia –para hacer realidad el derecho a la desconexión digital–, de adoptar Protocolos de obligado respeto en todas las empresas (para que se asegure en la praxis, y no resulte uso o meramente teórico, que no se manden mensajes desde la empresa, de forma que el servidor de correo no deje entrar los mensajes en la franja horaria de desconexión, etc.); e o a la manera en que se establece la obligatoriedad de Protocolos de guarda en ciertos niveles (teniendo presente que hay mucha PYME con escasa o nula representación de trabajadores);</p> <p>Se propone perfilar técnicamente la redacción de apartado 1.b) pues se menciona únicamente la intimidad por “método” con respecto a la Ley Orgánica 3/2018), para incluir, junto a la intimidad, el carácter autónomo de la protección de datos personales y de secreto de las comunicaciones, así como los correos electrónicos de empleador. En coherencia, esta misma adaptación se introduce seguidamente en la letra c), tal como figura en el último párrafo.</p>	<p>Artículo 87 LOPDGDD Artículo 88 LOPDGDD Artículo 89 LOPDGDD Artículo 90 LOPDGDD Artículo 91 LOPDGDD</p>	<p><i>Propuesta de modificación del apartado 1.a)</i></p> <p>a) La desconexión digital, <u>cuya efectividad vendrá favorecida por la adopción de Protocolos en todas las empresas u otras medidas impuestas por la legislación aplicable</u>.</p> <p><i>Propuesta de modificación del apartado 1.b)</i></p> <p>b) La protección de su intimidad, <u>sus datos de carácter personal y el secreto de sus comunicaciones</u> en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador, así como frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo. <u>A tal efecto, deberán ser informados por el empleador de su política de uso de los dispositivos digitales, incluidos los criterios para una eventual utilización para fines privados.</u></p>

<p>c) La intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización.</p> <p>En todo caso se garantizarán condiciones de trabajo digno en los entornos digitales.</p> <p>2. Cuando la naturaleza de puesto y las capacidades de la organización o permítanle promoverán condiciones de acceso a teletrabajo. En este caso, la ordenación de la prestación ahora se desarrollará con pleno respeto a la dignidad de la persona trabajadora garantizando parcialmente su derecho a la intimidad, la esfera privada de domicilio, los derechos de las personas que residen en él y el derecho a la conciliación de la vida persona y familiar.</p> <p>3. En los procesos de transformación digital:</p>	<p>Se propone añadir un subapartado d) para compensar la eliminación de inciso final a como se explica a continuación.</p> <p>Se propone eliminar el inciso final de apartado 1 (“En todo caso se garantizarán condiciones de trabajo digno en los entornos digitales”), tanto por su carácter genérico (el derecho a un trabajo digno o docente) o transversal (por eso mismo se cita la dignidad en el apartado 2), como para recoger una faceta más concreta de la dignidad, cuales es el derecho a la dignidad en el trabajo (como se recoge en varios textos internacionales, como el art. 31.1 de la CDFUE, inspirado a su vez en el más específico art. 26 de la Carta Social Europea revisada) frente al acoso, en este caso, digital. En este sentido, la mencionada supresión se vería compensada o sustituida por una letra d) de apartado 1, con el texto que figura en la última columna.</p>		<p><i>Propuesta de modificación del apartado 1.c):</i> c) “La intimidad, <u>los datos de carácter personal y el secreto de las comunicaciones</u>, ante la utilización de sistemas de geolocalización”.</p> <p>Propuesta de adición de un subapartado d) en el apartado 1: <u>“d) La protección de su dignidad en el entorno laboral frente al acoso digital”.</u></p> <p><i>Propuesta de supresión del inciso final del apartado 1</i> (“En todo caso se garantizarán condiciones de trabajo digno en los entornos digitales”) por los motivos indicados.</p> <p><i>Propuesta de modificación del apartado 2 por las razones ya explicadas:</i> “2. Cuando la naturaleza de puesto y las capacidades de la organización o permítanle promoverán condiciones de acceso a teletrabajo. En este caso, la ordenación de la prestación ahora se desarrollará con pleno respeto a la dignidad de la persona trabajadora garantizando parcialmente su derecho a la intimidad, <u>los datos de carácter personal, el secreto de las comunicaciones</u>, la esfera privada de domicilio, los derechos de las personas que residen en él y el derecho a la conciliación de la vida persona y familiar”.</p>
---	--	--	---

<p>a) Deberá proporcionarse a las personas trabajadoras una formación adecuada que permita su adaptación a las nuevas condiciones laborales;</p> <p>b) Se informará a la representación de os trabajadores sobre los cambios tecnológicos que vayan a producirse en la empresa y a participar en la toma de decisiones sobre la transformación digital y las consecuencias laborales que a misma pueda implicar;</p> <p>4. Sin perjuicio de derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en procesos de decisión automatizada, salvo en los supuestos previstos por la ley, se informará a los representantes de os trabajadores y a las personas directamente afectadas sobre el uso de la analítica de datos o sistemas de inteligencia artificial en la gestión, monitorización y procesos de toma de decisión en materia de recursos humanos y relaciones laborales. Este deber de información alcanzará como mínimo al conocimiento de los datos que se utilizan para la toma de decisiones, su lógica de funcionamiento y la evaluación de los resultados.</p>	<p>Se propone, en fin, para completar la protección de los derechos digitales en el entorno laboral un apartado de cierre (apartado 5) que se haga eco de art. 91 de la Ley Orgánica 3/2018, enfatizando así el rol de los representantes de los trabajadores, con la redacción que figura en la última columna.</p>		<p><i>Propuesta de adición del apartado 5:</i> <u>“5. Los convenios colectivos podrán establecer garantías adicionales de los derechos y libertades relacionados con el tratamiento de los datos personales de los trabajadores y la salvaguarda de derechos digitales en el ámbito laboral”.</u></p>
<p>XVIII. La empresa en el entorno digital</p>	<p>En general, en relación con la libertad de empresa, debería hacerse referencia a las transferencias de datos o al proceso de globalización y a su desarrollo y garantía en el entorno digital, a la idea de promover un entorno seguro para el mercado o formar a las empresas no solo</p>		

<p>1. Se reconoce a libertad de empresa en los entornos digitales en el marco de la economía de mercado. El desarrollo tecnológico y la transformación digital de las empresas deberá respetar los derechos digitales de las personas.</p> <p>2. Los poderes públicos promoverán la inversión, el desarrollo tecnológico y la innovación ordenados a la transformación digital de las empresas, el emprendimiento digital y el fomento de las capacidades de la sociedad para la generación de ciencia y tecnología nacionales.</p> <p>3. Se desarrollarán las condiciones que permitan la creación de espacios de pruebas controladas para desarrollar nuevos modos de negocio, aplicaciones, procesos o productos basados en la tecnología (<i>sandbox</i>).</p>	<p>para garantizar su seguridad sino para respetar los derechos digitales (no solo protección de datos, sino los derechos laborales digitales como la desconexión digital). Asimismo, se deberían establecer medios o mecanismos de protección para garantizar la adecuada protección de los menores en el entorno digital. Además, no solo haría referencia a la publicidad sino a los contenidos y a la "manipulación" de sus voluntades.</p> <p>Más concretamente, se propone, en la primera frase de apartado 1, añadir el calificativo "social" a la fórmula de la economía de mercado, para guardar congruencia, tanto con la fórmula de art. 1.1 CE como más específicamente con la fórmula de modelo económico de la UE expuesto con el Tratado de Lisboa (concretamente, en el art. 3.3 TUE), quedando la redacción propuesta tal como figura en el último comuna.</p> <p>Se propone completar el apartado 3 (para enfatizar la responsabilidad empresarial y la garantía de los derechos digitales), añadiendo el inciso que figura subrayado y en negrita en la redacción tentativa en el último comuna.</p>		<p><i>Propuesta de modificación del apartado 1.</i></p> <p>"Se reconoce a libertad de empresa en los entornos digitales en el marco de la economía social de mercado. El desarrollo tecnológico y la transformación digital de las empresas deberá respetar los derechos digitales de las personas".</p> <p><i>Propuesta de modificación del apartado 3.</i></p> <p>Se desarrollarán las condiciones que permitan la creación de espacios de pruebas controladas para desarrollar nuevos modos de negocio, aplicaciones, procesos o productos basados en la tecnología (<i>sandbox</i>), <u>en el ámbito de una economía digital que fomente la cultura de protección de datos personales regulando la responsabilidad activa de las empresas que tratan dichos datos para generar una mayor confianza en la ciudadanía</u>".</p>

DERECHOS DIGITALES EN ENTORNOS ESPECÍFICOS	<p>El entorno ahora ¿no se considera un entorno específico? Este tipo de dudas (entre otras) se evitaría si se aceptara nuestra propuesta de supresión de las rúbricas que sirven para clasificar o agrupar los diversos derechos (ver en “Derechos de libertad” las observaciones generales sobre esta propuesta).</p>		
<p>XIX. Derecho de acceso a datos con fines de investigación científica, innovación y desarrollo</p> <p>1. El uso de los datos de sector público y privado para el bien común se considera un bien de interés general.</p> <p>2. En el marco definido por las leyes se promoverán condiciones que garanticen la reutilización de la información y el uso de los datos para promover la investigación, la innovación y el desarrollo.</p> <p>3. Cuando se trate de datos personales:</p> <p>a) Los datos podrán ser tratados con fines de investigación científica, innovación y desarrollo previa anonimización.</p> <p>b) Únicamente será admisible el tratamiento de datos personales o pseudonimizados cuando la naturaleza de la actividad lo requiera y se cuente con el consentimiento o una autorización expresa prevista en norma con rango de ley.</p> <p>c) Se promoverán programas de donantes de datos para fines de investigación.</p> <p>En todo caso serán de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos</p>			

<p>personas y a la brechación de estos datos, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y la legislación sectorial que corresponda.</p> <p>4. El desarrollo de la investigación científica y tecnológica susceptible de repercutir en el ser humano respetará su dignidad y garantizará a toda persona, sin discriminación alguna, el respeto a su integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina.</p> <p>5. La investigación en áreas como la neurociencia, la genómica o la biotecnología, entre otras, aplicará o dispuesto en los párrafos anteriores y, en particular, garantizará el respeto a la dignidad, la libre autodeterminación individual, la intimidad y la integridad de las personas.</p>			
<p>XX. Derecho a un desarrollo tecnológico y a un entorno digital sostenible</p> <p>1. El desarrollo de la tecnología y de los entornos digitales deberá perseguir la sostenibilidad medioambiental y el compromiso con las generaciones futuras.</p> <p>2. Los poderes públicos impulsarán políticas ordenadas a la consecución de tales objetivos con particular atención a la sostenibilidad, durabilidad, reparabilidad y retrocompatibilidad de los dispositivos y sistemas evitando las políticas de sustitución temprana y de obsolescencia programada.</p>	<p>Ya que en los apartados 1, 2 y 3 se tratan sucesivamente la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad energética, ¿cabría enunciarlas en cada apartado?</p>		

<p>3. Los poderes públicos promoverán a ef c enc a energét ca en e entorno d g ta , favorec endo a m n m zac ón de consumo de energía y a ut zac ón de energías renovab es y mp as.</p>			
<p>XXI. Derecho a la protección de la salud en el entorno digital</p> <p>1. Se reconoce e derecho de todas as personas a acceso a os serv cos d g ta es de sa ud en cond c ones de gua dad, acces b dad y un versa dad.</p> <p>2. Los poderes públicos promoverán que a nvest gac ón y a tecno ogía contr buyan a ogro de una med c na prevent va, pred ct va, persona zada, part c pat va y pob ac ona .</p> <p>2- 3. E s stema de sa ud garant zará e desarro o de s stemas de nformac ón que aseguren a estandar zac ón, a nteroperab dad, e acceso y a portab dad de a nformac ón de pac ente.</p> <p>3- 4. E mp eo de s stemas d g ta es de as stenc a a d agnóst co, y en part cu ar de procesos basados en nte genc a art f ca no m tará e derecho a a bertad d agnóst ca de persona facu tat vo.</p> <p>4- 5. Los entornos d g ta es de sa ud garant zarán e peno respeto de os derechos fundamenta es de pac ente y en part cu ar su derecho a ser nformado y consent r en e tratam ento de sus datos persona es con f nes de nvest gac ón y en a ces ón a terceros</p>	<p>En re ac ón con e apartado 2 y sobre todo con e derecho a a nvest gac ón que v ene en e apartado s gu ente (que es e 3 aunque por error v ene numerado en e borrador tamb én con e número 2), debería hacerse menc ón a uso de a tecno ogía con f nes de nvest gac ón en e ámb to de a sa ud y de cump m ento de requ s tos como a anon m zac ón.</p> <p>Parece redundante ped r e consent m ento cuando tenga que ser requer do. Los entornos d g ta es de sa ud garant zarán e peno respeto de os derechos fundamenta es de pac ente y en part cu ar su derecho a ser nformado y consentir en el tratamiento de sus datos persona es con f nes de nvest gac ón y en a ces ón a</p>		<p><i>Se propone una modificación del apartado 3 añadiendo el texto subrayado y en negrita:</i></p> <p>3. E s stema de sa ud garant zará e desarro o de s stemas de nformac ón que aseguren a estandar zac ón, a nteroperab dad, e acceso y a portab dad de a nformac ón de pac ente, <u>así como las técnicas de anonimización de sus datos en los procesos de investigación correspondientes.</u>"</p>

<p>de tales datos cuando tales consentimiento sea requerido.</p> <p>6. Los poderes públicos impulsarán el acceso universal de la población a los dispositivos tecnológicos desarrollados con fines terapéuticos o asistenciales.</p>	<p>terceros de tales datos cuando tales consentimiento sea requerido.</p>		
<p>XXII. Libertad de creación y derecho de acceso a la cultura en el entorno digital</p> <p>1. Se reconoce el derecho a la libertad de creación en el entorno digital, promoviendo programas de formación en el sistema educativo y garantizando el derecho a la remuneración de persona creativa.</p> <p>2. Se garantizará el acceso a la cultura en el entorno digital, en los términos de los artículos 44.1 y 149.2 de la Constitución Española, así como de la Convención de la UNESCO sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, de 20 de octubre de 2005. En todo caso se tendrán en cuenta las normas sobre propiedad intelectual y los derechos derivados.</p> <p>3. En particular, los poderes públicos facilitarán el acceso digital a las diversas manifestaciones artísticas y culturales en espacios de su titularidad o de terceros con quienes colaboren de forma directa o indirecta. En particular, se promoverá el acceso digital a obras de dominio público.</p>	<p>En el apartado 3 se utiliza la expresión “en particular” dos veces. Por prurito de claridad, se aconseja sustituir una de las expresiones por otra de significado similar como por ejemplo, “en especial”.</p>		
<p>XXIII. Derechos ante la Inteligencia artificial</p>		<p>Artículo 11 LOPDGDD Artículo 22 RGPD</p>	

<p>1. En el desarrollo y ciclo de vida de los sistemas de Inteligencia Artificial:</p> <p>a) Se deberá garantizar el derecho a la no discriminación algorítmica, cualquiera que fuera su origen, causa o naturaleza de sesgo, en relación con las decisiones y procesos basados en algoritmos.</p> <p>b) Se asegurarán la transparencia, auditabilidad, explicabilidad y trazabilidad.</p> <p>c) Deberán garantizarse la accesibilidad, usabilidad y fiabilidad.</p> <p>2. Las personas tienen derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en procesos de decisión automatizada, incluidas aquellas que empleen procedimientos de inteligencia artificial, que produzcan efectos jurídicos o les afecten significativamente de modo similar, salvo en los supuestos previstos en las leyes. En tales casos se reconocen los derechos a:</p> <p>a) Solicitar una supervisión e intervención humana;</p>	<p>Reflexión sobre el apartado 1.b) donde se indica: “Se asegurarán la transparencia, auditabilidad, explicabilidad y trazabilidad.”. Sin embargo, esta previsión se ha ubicado en el apartado (1): “En el desarrollo y ciclo de vida de los sistemas de Inteligencia Artificial”, y por lo tanto, podría plantear dudas a aplicación al supuesto de apartado (2) en relación con las decisiones adoptadas basadas en procesos automatizados (sin uso de IA). Por ello el deber de transparencia, auditabilidad, etc., debería establecerse de forma general, en todo el precepto, y no dentro de un supuesto específico.</p> <p>Apartado 2.a) debería explicarse <i>cómo</i> tiene que ser la <i>intervención humana</i> para que el tratamiento deje de estar basado <i>únicamente</i> en procesos de decisión automatizada. Así, debe tratarse de una intervención humana sustantiva, que no sea meramente formal.</p>		<p><i>Propuesta de modificación del apartado 2</i></p> <p>a) Solicitar una supervisión e intervención humana de carácter sustantivo;</p>
--	--	--	--

<p>b) Impugnar las decisiones automatizadas o algorítmicas.</p> <p>3. Se deberá informar a las personas sobre el uso de sistemas de Inteligencia Artificial que se comuniquen con seres humanos utilizando el lenguaje natural en todas sus formas. Deberá garantizarse en todo caso la asistencia por un ser humano a solicitud de la persona interesada.</p> <p>4. Se prohíbe el uso de sistemas de Inteligencia Artificial dirigidos a manipular o perturbar la voluntad de las personas, en cualquiera de los aspectos que afecten a los derechos fundamentales.</p>	<p>de excur a aplicación de la salvaguarda de art. 22. RGDP (XXIII de la Carta). Este aspecto debería pues subrayarse: la intervención humana debe ser sustantiva y que no da en la decisión automatizada adoptada, de otro modo NO se excusarán las salvaguardas previstas en el precepto.</p> <p>En relación con el derecho a impugnar las decisiones automatizadas o algorítmicas de apartado 2.b), se podría concretar la vía que garantiza su ejercicio, saber: ¿una jurisdicción especializada?, o por el contrario, ¿una autoridad administrativa?</p>		
<p>XXIV. Derechos digitales en el empleo de las neurotecnologías</p> <p>1. Las condiciones, límites y garantías de implantación y empleo en las personas de las neurotecnologías serán reguladas por la ley con la finalidad de:</p> <p>a. Preservar la identidad individual como conciencia de la persona sobre sí misma.</p>			

<p>b. Garantizar la autodeterminación individual, soberanía y libertad en la toma de decisiones.</p> <p>c. Asegurar la confidencialidad y seguridad de los datos obtenidos o relativos a sus procesos cerebrales y el pleno dominio y disposición sobre los mismos.</p> <p>d. Ordenar el uso de interfaces persona-máquina susceptibles de afectar a la integridad física o psicológica.</p> <p>e. Asegurar que las decisiones y procesos basados en neurotecnologías no sean condicionadas por el suministro de datos, programas o informaciones incompletos, no deseados, desconocidos o sesgados, o por intrusión en conexiones neuronales.</p> <p>2. Para garantizar la dignidad de la persona, la igualdad y la no discriminación, y de acuerdo en su caso con los tratados y convenios internacionales, se regirá que los supuestos y condiciones de empleo de las neurotecnologías que, más allá de su aplicación terapéutica, pretendan el aumento cognitivo o la estimulación o potenciación de las capacidades de las personas.</p>			
<p>XXV. Garantía de los derechos en los entornos digitales</p>	<p>OBSERVACIÓN GENERAL</p> <p>La redacción y contenido de presente artículo XXV presenta varios problemas, tanto relacionados con la naturaleza jurídica y correspondiente observancia o eficacia de la Carta, como referentes a aspectos (técnicos, formas y sustancias) que tienen que ver con su sistemática.</p> <p><u>Con respecto a lo primero (cumplimiento, eficacia, observancia o valor de la Carta),</u> o cierto es que las “Consideraciones previas” que anteceden a la Carta (y</p>	<p>Artículo 39 LOPDGDD Artículo 85 LOPDGDD Artículo 86 LOPDGDD</p>	<p><i>Se propone una modificación de la rúbrica del art. XXV (texto en negrita y subrayado) que refiera, junto a la cuestión de la garantía, el aspecto referente al cumplimiento de la Carta que se reseña en la observación general correspondiente.</i></p> <p>“XXV. <u>Cumplimiento de la Carta y</u> garantía de los derechos en los entornos digitales”</p>

	<p>que, como se ha señalado en la primera observación, bien podrían figurarse como “Exposición de Motivos” que devenga “Preámbulo” en el texto finalmente adoptado si se prioriza la naturaleza de texto normativo de la Carta – sin perjuicio de su adopción con carácter más o menos programático de “código” o instrumento de “soft-law” – o bien sencillamente como una “Presentación” o “Introducción” si se opta por hacer prevalecer su adopción como mera “Guía”) no aclaran mucho sobre este aspecto. E incluso la medida en que –como se anticipó guiamente en la primera observación– introduce un triple objetivo (descriptivo, prospectivo y prescriptivo) que, o bien genera confusión en los destinatarios (sobre todo, en la ciudadanía) y el resto va or pedagógico (específicamente, los objetivos descriptivo y prospectivo), o bien suscita una cierta percepción distorsionada a sostener el objetivo “prescriptivo” y a tiempo afirmar que “la Carta no tiene carácter normativo”. Con relación a esta última cuestión, en realidad, sobre ser evidente que se ha redactado en términos técnicos (técnica normativa) como un texto normativo o articulado, no resulta adecuada esa afirmación sobre su carácter no normativo, pudiendo si acaso esgrimirse más acertadamente que contiene normas programáticas que recogen disposiciones, valores, principios o pautas de naturaleza más o menos jurídica, más o menos ética, cuyo cumplimiento efectivo se articulará de conformidad con las normas vigentes antes (nacionales, europeas e internacionales) de las que sean eventualmente reflejo, incluyendo el juego de las sanciones y garantías para el caso de incumplimiento. Por tanto, se propone (infra y en la última columna) un apartado primario que aclare este punto.</p> <p><u>Con relación a lo segundo (vertebrante sistemática)</u>, no es desacertado que las garantías (precedidas por ese apartado relativo a la observancia o cumplimiento recién reseñado) figuren en el último artículo (XXV), como “pieza de cierre” de la Carta, pudiendo mantenerse los apartados existentes con las siguientes observaciones y correcciones técnicas (y las correspondientes propuestas de redacción):</p>		
--	--	--	--

<p>1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sectorial específica, todas las personas tienen derecho a la tutela administrativa y judicial de sus derechos en los entornos digitales.</p>	<p>Se suprimieran las rúbricas relativas a la agrupación o categorización de derechos tal como hemos propuesto, podría mantenerse el art. XXV como esa “pieza de cierre” de cumplimiento y sistema garantista sin estar ubicado bajo la incorrecta rúbrica “DERECHOS DIGITALES EN ENTORNOS ESPECÍFICOS”.</p> <p>Los cuatro apartados de art. XXVV, con la guina precisa en su redacción que adquiere carácter transversal de su contenido en términos de cumplimiento y de garantías, no son incompatibles con el hecho de que en un buen número de artículos de la Carta se hablen de garantías específicas de cada derecho digital. Pues, no por casualidad, tal como se expresa en las “Consideraciones Previas” a la Carta, los derechos consignados en ella se inscriben en gran medida en el Título X (“Garantía de los derechos digitales”) de la LOPDGDD, en donde más que establecerse garantías, se configuran los propios derechos como instrumentos o instrumentos de garantía de las diversas facetas (o subderechos) de la protección de datos de carácter personal.</p> <p>Introducción de un nuevo apartado 1 (de manera que los apartados 1, 2, 3 y 4, pasarían a ser 2, 3, 4 y 5 respectivamente) en el que se concrete ese alcance del cumplimiento y eficacia de la Carta, con la redacción que se propone en la última columna.</p> <p>Se propone añadir en el apartado 1 (que sería el nuevo apartado 2) una referencia a las garantías específicas previstas en algunos de los derechos consignados en la Carta, con la redacción que se propone en la última columna.</p>		<p><i>Se propone introducir un nuevo apartado 1 con el siguiente tenor literal:</i></p> <p><u>“1. Los valores, principios, derechos y pautas consignados en el presente Carta informarán su interpretación y aplicación en la práctica, incluido el régimen de sanciones y garantías, de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable.”</u></p> <p><i>Propuesta de modificación del apartado 1 (que pasaría a ser apartado 2) para añadir una referencia a las garantías específicas previstas en algunos derechos, con la siguiente redacción (subrayada la adición en negrita y subrayada):</i></p> <p>4- <u>“2. Sin perjuicio de las concretas garantías previstas para algunos derechos en presente Carta y de lo dispuesto en la legislación sectorial específica, todas las personas tienen derecho a la tutela administrativa y judicial de sus derechos en los entornos digitales.”</u></p>
--	---	--	--

<p>2. Cuando a esón de ta es derechos, o e daño causado, produzca sus efectos en terr tor o españo podrá nvocarse a garantía de estos derechos por a autor dad adm n strat va o e órgano jur sd cc ona competente en España.</p> <p>3. Se promoverán mecan smos de autorregu ac ón regu ada y proced m entos de reso uc ón a ternat va de conf ctos.</p> <p>4. Los poderes púb cos evauarán as eyes adm n strat vas y procesa es</p>	<p>Se propone mejorar a redacc ón técn ca de apartado 2 (que sería e nuevo apartado 3) para sust tu r “nvocarse” por “hacerse valer” (puesto que se nvocan os derechos, no as garantías, as cua es se hacen va er -o cua qu er otro térm no equ parab e-), así como para sust tu r a prepos c ón “per” por “ante”.</p> <p>A modo de comentar o genera , ya se t ene exper enc a europea en e uso de mecan smos a ternat vos no jud c a es, para a reso uc ón de conf ctos nternac ona es en re ac ón con consum dores, a part r de un s stema de arb traje en ínea. Qu zá a exper enc a nstaurada con a entrada en v gor de Reg amento UE 524/2013, pueda serv r como base para su ap cac ón a a protecc ón de determ nados derechos ejerc dos en e entorno d g ta .</p> <p>Más concretamente, este precepto debería apostar frmemente por a mplementac ón de mecan smos de autorregu ac ón regu ada (qu zá resu ta más pert nente mod fcar o por mecan smos de cert f cac ón), en coherenc a con o d spuesto en e art. 39 LOPDGDD.</p> <p>S n embargo, e “térm no mecan smo de autorregu ac ón” es a todas uces amp o e nc uye cua qu er n cat va púb ca y pr vada. Consecuentemente, es necesar a una mayor concrec ón de este extremo, nc uyendo aque os mecan smos acred tados por a ENAC o aprobados por as d st ntas autor dades de contro .</p> <p>En este contexto, rem t mos a os esquemas nac ona es mpu sados y va dados por as APD o as normas ISO/IEC 27000:2019 [1] o ISO/IEC 27001:2017 [2] y 27701:2019 [3]</p>	<p><i>Propuesta de modificación del apartado 2 (que pasaría a numerarse 3) con cambios en negrita:</i></p> <p>2- “3. Cuando a esón de ta es derechos, o e daño causado, produzca sus efectos en terr tor o españo podrá nvocarse hacerse valer a garantía de estos derechos per ante a autor dad adm n strat va o e órgano jur sd cc ona competente en España.</p> <p><i>Propuesta de modificación del apartado 3 (que pasaría a numerarse 4 si se aceptara introducir el apartado 1 propuesto más arriba):</i></p> <p>“Se mpu sarán mecan smos de autorregu ac ón transparentes y supervisados que contemp en os cr ter os y os proced m entos que determ nan en este ámb to a actuac ón de os prestadores e ncorporen proced m entos de rec amac ón y rev s ón de as dec s ones de ret rada de conten dos. A tal fin, se entenderán como mecanismos de autorregulación aquellas normas técnicas que impulsen las distintas autoridades de control (AEPD o las respectivas agencias autonómicas de protección de datos) o aquellas iniciativas privadas que cuenten con el respaldo de estas o debidamente acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). Todo ello, sin perjuicio de las acciones y el control judiciales oportunas en defensa y cumplimiento de estos derechos.”</p> <p><i>Propuesta de modificación del apartado 4 (que pasaría a ser apartado 5) para añadir “el cumplimiento de y suprimir “administrativas y procesales”:</i></p>
--	---	---

<p>v gentes a fn de exam nar su adecuac ón a entorno d g ta y propondrán en su caso a rea zac ón de reformas oportunas en garantía de os derechos d g ta es.</p>	<p>Se propone mejorar a redacc ón técn ca de apartado 4 (que sería e nuevo apartado 5) para añadir “el cumplimiento de” nmed atamente antes de “as eyes...” (pues a dea de eva uac ón de as eyes es exces vamente genér ca, deb endo a ud rse más b en a cump m ento, mp ementac ón, observanc a, v genc a, ef cac a o puesta en práct ca), así como para sup r m r e nc so “adm n strat vas y procesa es” (a margen de que a opos c ón óg ca parece darse entre “sustant vas” – que no “adm n strat vas”– y “procesa es”, rea mente a ut zac ón de ca f cat vo “adm n strat vas” puede resu tar d stors onador, dado que, en e p ano sustant vo, pueden ser eyes “ab ora es”, “pena es”, etc., es dec r, puede generar confus ón hab ar de “adm n strat vas” en ugar de “sustant vas” como corre at vo de “procesa es”).</p>		<p>4- “5. Los poderes púb cos eva uarán el cumplimiento de as eyes adm n strat vas y procesa es v gentes a fn de exam nar su adecuac ón a entorno d g ta y propondrán en su caso a rea zac ón de reformas oportunas en garantía de os derechos d g ta es.”</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Con carácter genera , se recom enda adaptar a norma a en uage nc us vo (pa abras destacadas en verde). 			